

NOTICIAS SOBRE ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO



ENERO 2023

www.losgenoveses.net

ÍNDICE

FEIJÓO REUNIRÁ A AZNAR Y RAJOY EN UNA MISMA FOTO EN LA INTERMUNICIPAL DEL PP EN VALENCIA

FEIJÓO PRESENTA EL PLAN DE CALIDAD INSTITUCIONAL Y REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

FEIJÓO ABRE LA VÍA NACIONAL PARA EL FICHAJE DE VILLACÍS DESPUÉS DE QUE AYUSO LE CERRARA EL PASO EN MADRID

FEIJÓO: "NO VERÁ USTED A UN CATÓLICO MATAR EN NOMBRE DE SU RELIGIÓN. OTROS PUEBLOS TIENEN ALGUNOS CIUDADANOS QUE SÍ LO HACEN"

FEIJÓO PRESUME DE PROGRAMA REGENERADOR CON PROPUESTAS QUE JAMÁS CUMPLIÓ CUANDO PUDO EN GALICIA

ABASCAL PRESIONA A FEIJÓO PARA QUE LO ACEPTE COMO SOCIO PESE A LA POLÉMICA DE CASTILLA Y LEÓN

UNA JUEZ DE SALAMANCA REPROCHA A FEIJÓO QUE NO ACUDA A DECLARAR: "EL CITADO ERA ÉL; QUE HUBIERA VENIDO A DECIRME QUE NO SABE NADA"

WERT, DEL MAYOR RECORTE DE BECAS DE LA HISTORIA A "REESTIMAR" EL CIS PARA FEIJÓO

FEIJÓO Y EL ABORTO: NI SÍ NI NO, NI TODO LO CONTRARIO

EN LA MODERACIÓN DE FEIJÓO CABE TODO, DE SÉMPER A LOS TRÁNSFUGAS SAYAS Y ADANERO

FEIJÓO REMODELA LA DIRECCIÓN DEL PP EN PLENO DERRUMBE DE SU VALORACIÓN

LOS DIPUTADOS TRÁNSFUGAS DE UPN SAYAS Y ADANERO SE INCORPORAN AL PP: "HEMOS CREADO UNA ALTERNATIVA REAL"

EL FANTASMA DE LA CORRUPCIÓN PERSIGUE A FEIJÓO EN SU AÑO ELECTORAL

EL PP DE FEIJÓO BUSCA ENTRE TENSIONES CÓMO DESMARCARSE DE LOS EXCESOS DE VOX

FEIJÓO ABONA LAS TEORÍAS DE LA CONSPIRACIÓN Y ASEGURA QUE SÁNCHEZ TIENE "UN PLAN PARA ALTERAR" LA DEMOCRACIA

EL FICHAJE DE ALBIOL PARA EL COMITÉ DE CAMPAÑA DEL PP ROMPE LA IMAGEN DE MODERACIÓN QUE QUIERE VENDER FEIJÓO

UN DIPUTADO DE AYUSO PARTICIPA EN OTRA REUNIÓN DE POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES PARA MANIFESTARSE CONTRA EL GOBIERNO

EL PP CUESTIONA LA LEGITIMIDAD DEL GOBIERNO DOS DÍAS DESPUÉS DEL INTENTO DE GOLPE EN BRASIL

FEIJÓO COMPARA EL INTENTO DE GOLPE DE ESTADO EN BRASIL CON EL 'RODEA EL CONGRESO' DE 2016

EL PP USA EL ASALTO VIOLENTO A LAS INSTITUCIONES BRASILEÑAS PARA ATACAR A PEDRO SÁNCHEZ

FEIJÓO MANTIENE EL BLOQUEO DEL PODER JUDICIAL AFERRADO A SU PROPUESTA DE ELECCIÓN DE VOCALES

FEIJÓO METE EN UN CAJÓN LA DESPOLITIZACIÓN DEL TC PARA RECLAMAR EL 'DERECHO' DEL PP A DESIGNAR UN MAGISTRADO

EL VOTANTE "HOOLIGAN" Y EL BLOQUEO DEL CGPJ: EL ODIO A SÁNCHEZ EN LAS BASES DEL PP MARCA EL PASO A FEIJÓO

FEIJÓO ABRE EL CICLO ELECTORAL AFERRADO A LOS MENSAJES QUE LLEVARON A CASADO A LA DEBACLE HACE AHORA UN AÑO

EL PP REGISTRA UNA LEY EN EL CONGRESO PARA CAMBIAR EL SISTEMA DE ELECCIÓN DEL CGPJ

25 EXCUSAS PARA RENOVAR EL CGPJ: LO QUE EL PP NO CUENTA A BRUSELAS EN SU PROPUESTA JUDICIAL

UNA DERECHA EN TRANSFORMACIÓN Y CERRADA AL ACUERDO CON EL GOBIERNO

www.losgenoveses.net

FEIJÓO REUNIRÁ A AZNAR Y RAJOY EN UNA MISMA FOTO EN LA INTERMUNICIPAL DEL PP EN VALENCIA

Los dos expresidentes, distanciados desde hace años, intervendrán el sábado en el cónclave junto al líder popular

Es una imagen que no se veía desde hace años. Los dos expresidentes del Gobierno del PP, José María Aznar y Mariano Rajoy, juntos en un mismo escenario, compartiendo acto de partido y foto. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirá a los dos exmandatarios, distanciados desde el Gobierno de Rajoy, en la intermunicipal del partido que se celebra este fin de semana en Valencia, según han confirmado fuentes populares a EL PAÍS. Aznar y Rajoy intervendrán en el acto y se harán una foto con Feijóo, con la que el PP quiere mostrar que el líder popular es capaz de conciliar a las dos almas de la formación representadas en los dos expresidentes.

Feijóo ha gestionado personalmente la presencia de Aznar y Rajoy en el cónclave del fin de semana, explican fuentes de Génova. El PP utilizará este acto, al que asisten todos los cabezas de lista para los principales ayuntamientos, como lanzamiento de la campaña a las municipales y autonómicas de mayo.

Pablo Casado nunca consiguió la imagen conjunta de Aznar y Rajoy. Logró que asistieran a la convención del PP en 2021, pero por separado, el primero en Valladolid, y el segundo en Santiago de Compostela. Estaba previsto que los dos expresidentes hubieran coincidido en el congreso del PP de abril del año pasado que eligió a Feijóo, pero Aznar no pudo asistir al final porque se contagió de covid.

La relación de los líderes con los expresidentes del Gobierno es siempre delicada. Lo sabe bien Casado, defenestrado el año pasado por un pacto de los barones, que antes de ser descabalgado por los suyos terminó recibiendo importantes desaires de Aznar, que llegó a cuestionar en público su liderazgo. Feijóo, mucho más cercano a Rajoy, con quien tiene una especial relación de amistad, ha logrado de momento mantener también el respaldo de Aznar, que ahora incluso ha aceptado compartir foto con su sucesor en el Gobierno.

Aznar y Rajoy representan, de alguna manera, las dos almas en el PP: Aznar, la más neoliberal, la de los halcones que apuestan por la batalla cultural contra la izquierda; Rajoy, la más tecnócrata. Aznar rompió con Rajoy definitivamente en 2016, en pleno Gobierno del gallego, cuando decidió, tras años de desencuentros, renunciar al cargo de presidente de honor del PP. Desde entonces se les ha podido ver juntos en ocasiones contadas, siempre en actos institucionales que les obligaban a coincidir. Juntos, pero no revueltos.

La victoria de Casado en el congreso del PP en 2018 fue leída como un giro a la derecha del delfín blanco de Aznar, pero el mentor de Casado terminó rompiendo con su pupilo por la guerra interna de este con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su protegida.

Ahora, en la nueva etapa del PP bajo el liderazgo de Feijóo, predomina el marchamo rajoyista. El político gallego se siente más próximo ideológicamente al expresidente de su tierra, que muchos en el PP señalan como su principal influencia en estos momentos. Algunas fuentes del partido dicen incluso que con Feijóo, Soraya Sáenz de Santamaría ganó de forma simbólica las primarias que perdió contra Pablo Casado en 2018, porque gran parte del equipo de la exvicepresidenta y figura de la máxima confianza de Rajoy rodea ahora al líder popular. Íñigo Gómez de la Serna, Elías Bendodo, Javier Arenas, Fátima Báñez... son algunos de los dirigentes que acompañaron a Santamaría en las primarias contra Casado y que ahora han ganado ascendencia en el PP de Feijóo. Salvo la exministra de Empleo, que sigue trabajando en la CEOE pero asesora a Génova externamente, los otros tres son dirigentes en activo de la formación. A ellos se suma el reciente fichaje de Borja Sémper, que dimitió en 2020 por su distancia con la estrategia de Casado, y que acaba de convertirse en portavoz de campaña de Feijóo. A pesar de la influencia rajoyista en la era Feijóo, Aznar de momento no se baja del barco.

<https://elpais.com/espana/2023-02-01/fejoo-reune-a-aznar-y-rajoy-en-una-misma-foto-en-la-intermunicipal-del-pp.html>

FEIJÓO PRESENTA EL PLAN DE CALIDAD INSTITUCIONAL Y REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

El Plan incluye propuestas para el ámbito legislativo, judicial y ejecutivo

El presidente del Partido Popular ha presentado el Plan de Calidad Institucional y Regeneración Democrática en el Oratorio de San Felipe Neri, donde se promulgó la Constitución de 1812.

El presidente del Partido Popular subraya que el documento firmado hoy en Cádiz es una muestra de su compromiso con los españoles y constituye un “contrato con nuestro país” y una “herramienta contra la resignación”

“Defendemos que una política mejor es posible y la mejor manera de alcanzarla es con instituciones sólidas, prestigiosas y al servicio de los ciudadanos”, remarca

Define el texto como una respuesta “meditada, factible y capaz de ser asumida por quienes, sin ser del PP, comparten su preocupación y ansían una reacción democrática”

Destaca que el plan incluye un diagnóstico “certero y justo”, unos “principios sólidos y necesarios” y sesenta medidas para mejorar nuestra democracia y acabar con el nepotismo, la opacidad y la arbitrariedad

Asegura que el desarrollo de las propuestas recogidas en el citado plan está a disposición del Gobierno y que, en caso contrario, el PP las impulsará “en su totalidad en los cien primeros días de la próxima legislatura”

“Estamos a tiempo de frenar la erosión de las instituciones y recuperar el sentido de Estado tan necesario para seguir avanzando juntos”, sostiene Feijóo tras recordar que en los últimos años “ninguno de los tres poderes del Estado ha quedado a salvo de una degeneración democrática”

Afirma que los españoles no merecen ni un Gobierno que les mienta ni organismos e instituciones que sean meros apéndices del Ejecutivo, porque son propiedad de todos los españoles

Avanza que el desarrollo del plan tendrá como consecuencia inmediata “la limitación de la discrecionalidad del poder”

Apuesta por instituciones y organismos que sean un espacio común, dotados de una triple garantía: neutralidad, pluralidad y eficacia

Considera necesario dar un “paso al frente en un momento crucial de la democracia española que surge con la Constitución de 1812 y se recupera, y consolida, con la de 1978”

Valora que una gran mayoría del pueblo español se identifica con los valores constitucionales y desea que permanezcan en pie. “Nosotros sabemos que estamos al lado de la mayoría moderada de la Nación. Los españoles que en 1812 impulsaron la Pepa querían lograr una España constitucional. Los de hoy queremos que no nos la arrebatan”, añade

Censura que desde el Gobierno se erosionen, “mediante el desprestigio deliberado o el uso partidario, instituciones claves para una convivencia social y una política ordenada”

“Se sigue un guion que escriben los anticonstitucionalistas e interpreta el poder ejecutivo, a espaldas de la soberanía popular y con menoscabo de la división de poderes”, lamenta

Advierte de que el PP “está hoy aquí para denunciarlo y rebelarse” y demostrar que la del Gobierno no es la única política posible en España”. “Hay una política mejor, porque hay una España mejor que la que promueve Sánchez. Una España que merece unas instituciones mejores, que sirvan a unos ciudadanos libres e iguales ante la Ley, sin privilegios ni discriminaciones por ser afines o no al Gobierno de turno”

Remarca que la tarea más acuciante de la democracia española es defender ese espacio común en el que todas las ideologías democráticas convivan, debatan y se alternen

<https://www.pp.es/actualidad-noticia/fejoo-presenta-plan-calidad-institucional-regeneracion-democratica>

FEIJÓO ABRE LA VÍA NACIONAL PARA EL FICHAJE DE VILLACÍS DESPUÉS DE QUE AYUSO LE CERRARA EL PASO EN MADRID

La dirección del partido valora “el talento” de la dirigente de CS, pero le advierte de que si se une al PP no podrá formar ninguna corriente interna

El posible fichaje de Begoña Villacís, se felicitan en el PP madrileño, “no va a ser un Toni Cantó dos”. Es decir, que a diferencia de lo que ocurrió con el actor y exdirigente de CS, a quien Isabel Díaz Ayuso tuvo que colocar como director de la Oficina del Español después de que Génova le impusiera su fichaje, ahora la dirección nacional del PP no va a forzar la incorporación de la vicealcaldesa de la capital en las listas madrileñas. La cúpula de Alberto Núñez Feijóo abre la puerta a que Villacís se integre en el partido a escala nacional, una vez la presidenta de la Comunidad de Madrid le cerró el lunes el paso en su territorio. Génova valora “el talento” de la vicealcaldesa, pero le advierte de que si se une al PP no podrá formar ninguna corriente interna, afirman fuentes del entorno directo de Feijóo.

Ayuso tenía claro el mensaje que iba a transmitir sobre Villacís el lunes, aprovechando su participación en la reunión del comité ejecutivo del PP. A su llegada a la sede del partido en la calle Génova, la líder madrileña expresó sus reticencias sobre el fichaje de la política de CS para el PP de Madrid. “Lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo”, dijo en referencia a su consejera de Cultura, Marta Rivera. “Y ahora, si tienen conversaciones a nivel nacional, yo no tengo nada que opinar”, añadió, dejando claro que el fichaje, si sucede, tendría que tener encaje nacional.

La líder madrileña ya había hablado con Génova hacía semanas sobre Villacís, según fuentes de su entorno, y hubo acuerdo en que Feijóo no le impondría su fichaje, como Pablo Casado sí le obligó a hacer con Toni Cantó. Ahora, Ayuso es la presidenta del PP madrileño y tiene la competencia de la elaboración de las listas electorales, tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento, aunque vaya a hacerlo de forma acordada con el alcalde de la capital.

Por si quedaban dudas, tras las palabras de Ayuso su número dos en el gobierno, el vicepresidente Enrique Ossorio, fue tajante cerrando el paso a la vicealcaldesa: “Por parte del PP de Madrid regional no consideramos sinceramente esa incorporación”. Según fuentes del equipo de la presidenta, se descarta la posibilidad de que recalara tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento.

Génova sabía que Ayuso no quería a la vicealcaldesa en Madrid y Feijóo cerró filas con su baronesa madrileña, evitando cualquier problema interno. En la reunión con los barones en el comité ejecutivo, el líder del PP dejó claro que él dejará libertad a los territorios para elaborar sus listas, sobre todo en el caso de los presidentes que están gobernando, según fuentes presentes en el órgano. De esta forma, Feijóo subrayó a puerta cerrada, delante de Ayuso y de todos los demás líderes territoriales, que no impondrá al PP madrileño la incorporación de Villacís.

A partir de esa negativa en Madrid, Génova abre la vía nacional para su incorporación en el PP, según reconocen fuentes próximas a Feijóo. En la cúpula popular admiten que sí les interesa el perfil de la vicealcaldesa, y de ahí la reunión que el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, mantuvo con ella la semana pasada para estudiar su paso al PP. Una de las opciones es que se uniera como candidata al Congreso, pero Génova advierte de que no aceptará corrientes internas. “Aquí no se viene a fragmentar al PP”, afirman tajantes fuentes de la confianza de Feijóo. El resto del partido saluda su posible incorporación, pero la vicealcaldesa tampoco es recibida con entusiasmo. “Ella no aporta ni talento ni gestión, pero sí la percepción de que CS se integra en el PP”, opina un barón popular en privado.

El problema de Villacís, una vez han saltado a la luz sus movimientos, es que todo se le ha complicado tanto en su partido como en el PP. Para empezar, la dirección nacional de CS ha cerrado la puerta a que Ciudadanos concorra en Madrid con el Partido Popular, ya sea en listas conjuntas o cediendo concejales independientes en la candidatura del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a cambio de no presentar candidatura propia. “Esta ejecutiva cumplirá con el mandato que nos otorgaron los afiliados. Tenemos muy claro que defenderemos nuestro espacio propio, el liberal. Quien se presente a ser la candidata del Ayuntamiento de Madrid debe respetar el mandato de los afiliados y de la dirección del partido”, dijo el lunes la líder de Ciudadanos, Patricia Guasp, en conferencia de prensa en la sede de la formación, en la que reiteró, no obstante, que Villacís es un “gran activo” del partido y que siguen contando con ella

para ser la "candidata" de CS en Madrid. Sin embargo, la formación le da una semana de plazo para decidir su futuro, porque las primarias para los cabezas de lista en las elecciones municipales se celebrarán entre el 15 y el 16 de febrero, y ella tendría que postularse si quiere concurrir a ese proceso de elección interno ya este fin de semana, con el domingo como fecha límite. Villacís tiene poco tiempo para decidir sus próximos pasos, pero ahora el salto al PP también se le ha complicado.

La vicealcaldesa se reunió con los 10 concejales de su equipo en la mañana del lunes en Cibeles en un cónclave en el que se trató el tema de su futuro. Un turbulento encuentro que abandonó para asistir a otra reunión prevista con la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, a las 15.00 en la sede del partido, según confirman varias fuentes de CS. Sin embargo, no se presentó. Un plantón a la dirección nacional de su todavía partido en plena recta final de su decisión final.

<https://elpais.com/espana/2023-01-31/feijoo-abre-la-via-nacional-para-el-fichaje-de-villacis-despues-de-que-ayuso-le-cerrara-el-paso-en-madrid.html>

FEIJÓO: "NO VERÁ USTED A UN CATÓLICO MATAR EN NOMBRE DE SU RELIGIÓN. OTROS PUEBLOS TIENEN ALGUNOS CIUDADANOS QUE SÍ LO HACEN"

El Gobierno, indignado con el líder del PP, cree que actúa de forma irresponsable por presión de Vox

Tras el ataque sucedido ayer en Algeciras, por el que un hombre de origen marroquí de 25 años asesinó a un sacerdote e hirió a otras tres personas, Alberto Núñez Feijóo ha proclamado la superioridad de la religión católica sobre las demás, porque, ha destacado, los católicos no matan en nombre de su religión. En Barcelona, en un coloquio en el Círculo Ecuéstre, el líder del PP ha afirmado que "el terrorismo islámico es un problema de toda la sociedad europea y debemos actuar de forma unida y sabiendo que hay latente un problema porque hay personas que matan en nombre de un Dios o una religión". A renglón seguido, el presidente del partido conservador ha añadido: "Y, sin embargo, nosotros, desde hace muchos siglos, no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión y sus creencias. Y hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen".

Poco después, ya en Madrid, el líder del PP ha tratado de matizar sus palabras, aunque ha seguido insistiendo en que no hay un problema de terrorismo católico y sí islámico. "Lo que ha ocurrido no tiene que ver con la religión, no se puede criminalizar ninguna religión. Una cosa es el fanatismo y otra la religión", ha expresado Feijóo. "Creo yo, dicho esto", ha abundado, "que todos coincidiremos que con carácter general no hay un problema de terrorismo católico en el mundo; sin embargo sí hay un problema de integrista islámico en algunos lugares del mundo, también en los países islámicos. Esto no solo pasa en España, nos acordamos de Atocha y de las Ramblas, de lo que ocurrió en París. No es un problema de España ni de Europa. Ni de EEUU, donde se derribaron las torres gemelas".

El Gobierno, indignado con esta declaración de Feijóo, le acusa de irresponsable y cree que se ha dejado arrastrar por Vox, que hasta que habló el líder del PP era el único partido que hablaba de manera generalizada de la comunidad islámica en el contexto del atentado. "Hay veces que es mejor permanecer callado y parecer responsable, que hablar así", ha señalado en twitter la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, con un vídeo con las palabras de Feijóo. "Es miserable extender el odio contra un colectivo que ya de por sí está muy estigmatizado", había dicho la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, antes de que hablara el líder del PP, pensando en Vox.

La declaración de Feijóo contrasta con la de la Conferencia Episcopal Española, que hoy ha pedido que no se identifique el ataque con ninguna fe, ni se aproveche para "demonizar" a los musulmanes. "En España tenemos la experiencia del peligro de demonizar colectivos", ha reflexionado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán. "Cuando este país sufría el azote terrible del terrorismo, no se podía caer, y se cayó en alguna ocasión, en la identificación entre terroristas y el noble, el leal y trabajador pueblo vasco. Cuando murió Francisco Tomás y Valiente, el grito fue 'vascos sí, ETA no'. No podemos caer en provocaciones, ni echar leña al fuego, ni caer en demagogias, ni identificar terrorismo con ninguna fe", ha reclamado el obispo, que si bien ha señalado que, aunque en este caso ha habido "motivación religiosa, de odio a la fe", no se puede ni se debe "demonizar a colectivos o

grupos en general". Además, García Magán ha recordado que la comisión islámica española ya ha condenado los ataques. El propio presidente de la Junta de Andalucía, del PP, en la misma línea que la Conferencia Episcopal, había señalado por la mañana: "que nadie generalice hacia ningún colectivo ni étnico ni religioso".

Falta de comunicación entre Sánchez y Feijóo

Feijóo, a pesar de sus declaraciones, ha insistido en que no tiene información de lo sucedido por parte del Gobierno, y ha pedido conocer los hechos y "circunvalar las responsabilidades antes de empezar a tensionar más de lo imprescindible". El PP ha denunciado este jueves con indignación que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha informado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sobre el ataque de anoche en Algeciras. Los populares reclaman, además, la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de Estado contra el terrorismo yihadista. La secretaria general, Cuca Gamarra, se ha quejado también en rueda de prensa en la sede del partido de que Sánchez tampoco ha transmitido información a Feijóo sobre el envío de tanques Leopard a Ucrania.

El Gobierno señala que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha llamado al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y la secretaria de estado de seguridad, Rafael Pérez, llamó a Gamarra, aunque lo hizo después de la rueda de prensa de la secretaria general del PP en la que criticó con dureza al Ejecutivo, alrededor de las 16.00. Marlaska llamó a Moreno después de regresar de Estocolmo, donde estaba en viaje oficial. Según fuentes de Interior, ambas conversaciones fueron cordiales y para nada en un tono similar al de las críticas públicas.

En La Moncloa no acaban de entender el tono del PP ante una cuestión tan sensible. Sobre la posibilidad de reunir al pacto antiyihadista, nadie en el Ejecutivo lo descarta abiertamente pero la cuestión se circunscribe de momento a una sola persona sin aparentes vínculos con ninguna organización, y ni siquiera parece nadie con especial formación. Por tanto la situación no parece similar a la de otros atentados mucho más coordinados, con grupos que llevaban meses preparándolos, como los de Las Ramblas en 2017. En cualquier caso en España este tipo de cuestiones se llevaban siempre con unidad entre los partidos, por eso en La Moncloa están sorprendidos con la reacción del PP y mucho más con la frase de Feijóo sobre los cristianos y los musulmanes. Según un estudio del año pasado de la Unión de Comunidades Islámicas, hay casi un millón de ciudadanos españoles que son musulmanes, y en total hay más de dos millones de personas que viven en el país y profesan esta religión.

El PP quiere hacer una batalla política de la falta de comunicación entre Sánchez y Feijóo, cuya relación es inexistente desde la ruptura de la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial en el mes de octubre de 2022. Los populares se quejan de que la incomunicación se mantiene también ante hechos de relevancia, como el ataque de Algeciras o la decisión del Gobierno de enviar tanques a Ucrania junto con los aliados europeos. "El presidente no ha informado de absolutamente nada al líder de la oposición", ha lamentado Gamarra en una comparecencia en la calle Génova.

La número dos de Feijóo sostiene que "la ausencia de comunicación e información no es propia de una democracia como la española" y asegura que el PP pretende más contacto con el Gobierno para respaldarle en asuntos de Estado. "Hay cuestiones en las que el Gobierno no debe estar solo, y no tiene por qué estar solo", ha defendido Gamarra. Según fuentes de la dirección popular, en esta ocasión el partido no ha recibido ninguna información por ningún canal, tampoco por los cauces parlamentarios habituales.

Antes de la llamada de Marlaska, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, también se había quejado de que el Gobierno no le había transmitido información sobre el ataque de Algeciras. "Creo que sería sensato que al presidente de la Junta de Andalucía se le diera algún tipo de información un poco más precisa, sin interferir en la investigación", había reclamado en TVE.

El PP reclama un cauce de información institucionalizada y frecuente entre el presidente y el líder de la oposición, o entre las personas en las que ambos acuerden delegar. Los conservadores presentarán una proposición no de ley en el Congreso para instar a que se regule ese canal. Los populares han incluido esta medida en el plan de "calidad institucional" que el líder del PP presentó este lunes en Cádiz, en el que piden que, en todo caso, el presidente informe al líder de la oposición "como mínimo una vez durante cada periodo de

sesiones” sobre los siguientes asuntos: tras la celebración de cumbres internacionales; sobre decisiones sustanciales en Política Exterior y Defensa; al menos una vez durante cada periodo de sesiones sobre el pacto Antiterrorista; y sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La secretaria general del PP ha condenado el ataque de Algeciras y se ha desmarcado del discurso de Vox, que se ha apresurado a relacionar lo sucedido con la inmigración ilegal y con el Islam. “No podemos tolerar que el islamismo avance en nuestro suelo”, ha afirmado el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, mientras otros dirigentes de su partido, como Jorge Buxadé, sostienen que lo ocurrido demuestra que “estamos ante una invasión inmigratoria [sic.]”. Preguntada por estas declaraciones, Cuca Gamarra ha puesto distancia. “Nosotros no vamos a estigmatizar a ningún colectivo por lo que haga uno de sus integrantes. No es el camino. El camino es combatir a los integristas, pero respetamos a aquellos que no lo son, que forman parte de nuestra sociedad”, ha reflexionado Cuca Gamarra. Las palabras de Feijóo llegaron después, y también la reacción del Gobierno calificándole de irresponsable.

<https://elpais.com/espana/2023-01-26/el-pp-denuncia-que-sanchez-no-ha-informado-a-feijoo-del-ataque-en-algeciras-y-pide-la-convocatoria-del-pacto-antiyahadista.html>

FEIJÓO PRESUME DE PROGRAMA REGENERADOR CON PROPUESTAS QUE JAMÁS CUMPLIÓ CUANDO PUDO EN GALICIA

Feijóo quiere limitar “por ley” el número de ministerios, altos cargos, asesores y miembros de los gabinetes del Gobierno

Ayuso desprecia el empeño del líder del PP y se desmarca de la idea de que gobierne la lista más votada

El 12 de febrero de 2009, a pocos días del inicio de la campaña electoral que le llevó a su primera mayoría absoluta, Alberto Núñez Feijóo convocó a la prensa para firmar un documento con 14 compromisos que él mismo presentó como su “contrato con Galicia”. Fue un acto deliberadamente solemne en el que se fotografió enmarcado por dos banderas de Galicia y utilizó como telón de fondo la residencia oficial del presidente de la Xunta, entonces ocupada por el socialista Emilio Pérez Touriño.

Algunos de aquellos compromisos se parecen mucho a los que Feijóo acaba de firmar este lunes. También en un acto diseñado a la medida de sus aspiraciones presidenciales —banderas de España y de la UE y la pompa propia de los grandes eventos—, en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, el histórico edificio que albergó la firma de la Constitución de 1812.

El líder del PP prometía en 2009 llevar a cabo una “regeneración democrática” en Galicia y acabar con las “prácticas clientelares”. Anunciaba “austeridad” y reducción de “gastos superfluos” en publicidad, altos cargos, gabinete, asesores, automóviles, obras y dependencias del gobierno. Exactamente igual que ahora.

Entonces los de Feijóo ya llevaban tiempo avanzando en las encuestas a lomos de la inventada afición al lujo de Touriño, con denuncias públicas que describían reformas opulentas de su despacho y gastos desproporcionados en coches oficiales. Ahora el equipo del presidente del PP busca agitar la misma ola apoyándose en un supuesto gasto excesivo en el Gobierno, en el presunto uso de medios como el Falcon para asuntos de partido y, por supuesto, en lo que el PP llama “el asalto de las instituciones”.

Para dar más empaque a sus propuestas, muchas de las cuales tienen su origen en ideas de Pablo Casado, el líder del PP las ha reunido todas en un documento de 30 páginas en el que hay pocas novedades. Muchas de ellas no pasan de un enunciado voluntarista (“Se homologará verdaderamente la protección de la Constitución y la integridad territorial del Estado a los países de nuestro entorno”, proclama la primera propuesta sin explicar cómo planea el PP hacerla realidad), otras son bien conocidas, como la que plantea reformar el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para privar al Congreso y al Senado de su participación en el proceso y dejar la selección exclusivamente en manos de los jueces o la que propone deshacer la reciente reforma del Código Penal en relación con la sedición y la malversación.

Der todas ellas hay un buen puñado que podría haber implementado y aplicado en Galicia

durante los años que gobernó su comunidad natal, pero no lo hizo. Ni limitó por ley el tamaño de los gobiernos, ni la capacidad del Parlamento de enmendar leyes, ni reforzó los informes de organismos consultivos para las propuestas de los partidos, ni fijó la periodicidad de los debates sobre el estado de la autonomía, ni reguló las relaciones con el jefe de la oposición. Tampoco, por supuesto, liberó del control político a la radio y la televisión públicas.

Recortar al legislativo y al ejecutivo

En realidad, buena parte de las ideas que Feijóo se compromete a impulsar, bien mediante un improbable acuerdo con el Gobierno, bien cuando llegue él mismo a la Presidencia si lo consigue en las elecciones de finales de año, tratan de recortar la capacidad de decisión del ejecutivo y de legislativo.

El PP quiere limitar el uso que el Gobierno puede hacer del real decreto ley, una fórmula que Pedro Sánchez ha utilizado con frecuencia durante toda la legislatura y que permite al Ejecutivo, en nombre de la urgencia, que sus medidas entren en vigor sin esperar a un largo trámite en el Congreso. Los reales decretos ley, sin embargo, no escapan al control legislativo: tienen que ser aprobados por la Cámara en las semanas siguientes a su entrada en vigor y, de no conseguir el apoyo de la mayoría, son anulados.

También propone que el presidente esté obligado anualmente a comparecer en un debate sobre el estado de la nación (desde que se utilizó por primera vez, en 1983, esta fórmula es potestativa, depende de la voluntad del Gobierno) y que su Ejecutivo esté también obligado a dar cuenta del grado de cumplimiento de las mociones y proposiciones no de ley (las iniciativas de impulso que aprueba el Congreso y que los ministerios no están obligados a hacer realidad).

Feijóo quiere dar más poder sobre lo que hace el legislativo a los organismos de control como el Consejo de Estado o a los que representan a otros poderes, como el CGPJ. Y quiere crear otros nuevos, como una Oficina de Calidad Legislativa con capacidad no sólo de asesorar a los diputados sino de hacer propuestas. El líder del PP quiere además “informes técnicos” también sobre las leyes que propone la oposición y limitar las enmiendas que se pueden presentar a las leyes.

El documento firmado por Feijóo en Cádiz propone también (y se compromete a hacerlo si llega al Gobierno) reformar la ley electoral para reducir las competencias de los plenos municipales y proclamar automáticamente alcalde al cabeza de la lista más votada, con independencia de que tenga o no mayoría para gobernar. Para facilitarle las cosas en un pleno municipal que no controlará, el PP quiere que ese alcalde no esté obligado a someter al pleno “asuntos de naturaleza gestora”, sin precisar a qué se refiere.

Contradicción

La propuesta, que contradice la forma en la que el PP ha actuado durante décadas, incluida la que Feijóo impulsaba cuando era presidente en Galicia, recibió este lunes el rechazo unánime de todos los partidos. Incluido el reproche inesperado de la presidenta de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, que desdeñó la idea de Feijóo y se mostró más partidaria de un modelo a dos vueltas, consciente de que conseguir una alcaldía no garantiza la gobernabilidad. “Es hablar sobre futuribles que no lo sé”, declaró en una entrevista en Antena 3 en la que recordó que ella misma alcanzó la Presidencia en 2019 sin encabezar la lista más votada, igual que Alfonso Fernández Mañueco o Fernando López Miras ese año y Juanma Moreno en 2018.

“Yo creo que si hay más escaños hacia un lado que hacia el otro que quieren un gobierno u otro... bueno... no lo veo mal”, aseguró respaldando el modelo actual, que exige formar mayorías. “Lo que sí creo que es un sinsentido es lo que está pasando, de manera que minorías son quienes deciden por todos, y, sin embargo, los partidos que han obtenido más votos, que han quedado segundos o terceros o primeros y no han podido hacer gobierno se quedan fuera”, explicó.

Entre las medidas con las que quiere recortar o limitar las competencias que tiene el Gobierno en la actualidad, el líder del PP citó también una reforma para obligar al presidente a informar al jefe de la oposición tras la celebración de cumbres internacionales en materia de política exterior y defensa o en relación con asuntos como el pacto antiterrorista o el pacto de estado contra la violencia de género.

Feijóo quiere limitar “por ley” el número de ministerios, altos cargos, asesores y miembros de los gabinetes del Gobierno —otra medida que no adoptó cuando gobernaba en Galicia y tuvo

oportunidad de hacerla realidad— y recortar el uso de los medios aéreos y terrestres que desde hace décadas utilizan el presidente y los ministros para sus desplazamientos, incluyendo el número de miembros de las comitivas oficiales.

En vísperas de que España asuma la presidencia de turno de la UE, que coincidirá con la campaña electoral, el PP quiere que el presidente vea limitada su capacidad de viajar al extranjero. Feijóo está pensando en los contactos con la comunidad española en otros países y quiere que no puedan utilizarse medios oficiales para viajar si durante el desplazamiento están previstos eventos de esta naturaleza. Viajar a costa del presupuesto público para reunirse con la colectividad gallega en el exterior es precisamente algo que él mismo hizo de manera habitual como presidente de Galicia durante sus trece años de mandato, aunque sí reguló su prohibición desde el día de convocatoria de los comicios.

Las propuestas del PP pretenden además limitar la capacidad del Gobierno y de las Cámaras a la hora de designar a los responsables de entidades y organismos muy diversos, desde el CNI al INE, pasando por el CIS, el Tribunal Constitucional, el CGPJ, la Fiscalía General o el Consejo de Estado, y homogeneizar “los rangos de retribuciones” de los cargos públicos “con el fin de adaptarlos a su nivel de responsabilidad”.

En relación con RTVE propone, “en aras de asegurar la independencia y la libertad de expresión”, “respetar el trabajo de sus profesionales” algo que tampoco hizo en los medios públicos de Galicia durante sus cuatro mandatos.

https://www.infolibre.es/politica/fejoo-presume-programa-regenerador-propuestas-cumplio-pudo-galicia_1_1412579.html

ABASCAL PRESIONA A FEIJÓO PARA QUE LO ACEPTE COMO SOCIO PESE A LA POLÉMICA DE CASTILLA Y LEÓN

Vox aparca la moción de censura contra Sánchez y ataca al nuevo portavoz de campaña del PP

Durante la tensa entrevista que Federico Jiménez Losantos le hizo el miércoles a la responsable de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, esta no criticó ni una sola vez al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. En cambio, atacó repetidamente a Borja Sémper, el nuevo portavoz de campaña de los populares. “El PP de Sémper agacha las orejas y se pliega a lo que le dictan los partidos de izquierda”, aseguró, como si el último fichaje de Feijóo, con menos de dos semanas en el puesto, fuera el jefe del partido.

Vox tiene motivos para estar obsesionado con el nuevo rostro del PP. Sémper es un viejo conocido de Santiago Abascal. Como este, fue miembro de Nuevas Generaciones, concejal y diputado del Parlamento Vasco en los años de plomo, cuando tener carné del PP era convertirse en objetivo de ETA. Pero, al contrario que el presidente de Vox, Sémper nunca ha presumido de ello y, lejos de radicalizarse, apuesta por el respeto y el diálogo con el adversario político.

Sémper y Abascal se aprecian mutuamente —“mi relación personal con Santi está a prueba de bombas”, contestó el primero a preguntas de los periodistas—, pero el segundo sabe que la presencia su antiguo correligionario al lado de Feijóo es un serio obstáculo para su pacto con el PP. “Vox es populista y reaccionario. Eso nos pone a una distancia sideral”, declaraba a EL PAÍS en enero de 2019, un año antes de dejar la política y pasar a la empresa privada, de donde lo ha rescatado ahora Feijóo.

Fuentes de Vox atribuyen a Sémper la oferta del PP al PSOE para que, tras las próximas elecciones, gobierne el candidato de la lista más votada aunque no tenga mayoría absoluta —a pesar de que hace tiempo que Feijóo defiende esta posición—; lo que desactivaría a los grupos minoritarios. Abascal ya ha denunciado lo que califica de “nuevo intento de imponer un cordón sanitario” a Vox, y ha advertido a Feijóo de que podría aplicar la misma fórmula en comunidades autónomas y ayuntamientos en los que el PP no sea el primer partido pero la derecha sume mayoría tras las elecciones de mayo, ofreciendo así en bandeja presidencias autonómicas y alcaldías a la izquierda.

Pese al fiasco de las elecciones andaluzas, en las que el PP obtuvo mayoría absoluta, Vox no ha cambiado de estrategia: su objetivo sigue siendo obligar a Feijóo a aceptarlo como socio indispensable para llegar a La Moncloa, convirtiéndolo en rehén de su apoyo. El escándalo del

protocolo fantasma de Castilla y León para ofrecer a las mujeres que quieran abortar escuchar el latido del feto y verlo en una ecografía 4D ha recordado al PP los riesgos de tener semejante compañero de viaje.

Vox subraya que el vicepresidente castellano-leonés, Juan García-Gallardo, no se inventó las medidas que anunció en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno del 12 de enero; insiste en que el protocolo antiabortista fue pactado con el presidente Alfonso Fernández Mañueco y figura expresamente en el comunicado que ese día hizo público la Junta. Lo cierto es que Vox se apuntó un tanto, ya que, en contra de lo que aseguraron ambos partidos, esas medidas no figuraban en el pacto de Gobierno de Castilla y León; en el que solo se hablaba genéricamente de apoyar la natalidad mediante ayudas directas e incentivos fiscales.

Sin embargo, ante la dimensión que tomó la polémica, desde Génova se obligó a Mañueco a dar marcha atrás y se lanzó un órdago a Vox: "Si se quiere marchar del Gobierno [de Castilla y León] que se marche, es una decisión suya". Abascal no recogió el guante; lo último que quiere es acabar con el único Gobierno de coalición entre PP y Vox, que debe servir como modelo a nivel nacional.

Quizá no sea ese el único paso atrás que tenga que dar: en la dirección de Vox empieza a calar la idea de que fue un error anunciar, el 9 de diciembre, la presentación de una segunda moción de censura contra Sánchez. Abascal no ha logrado arrastrar a Feijóo con su estrategia, que este considera un "balón de oxígeno" para el presidente del Gobierno; y el mirlo blanco, el candidato independiente capaz suscitar el consenso de toda la derecha, no acaba de aparecer. Ante la tesitura de repetir el fiasco de octubre de 2020, cuando solo obtuvo el respaldo de sus propios diputados, Abascal baraja guardar la moción en un cajón hasta que se olvide. El sábado, en la concentración de Cibeles, no la dio por segura. "Los partidos tienen herramientas y nosotros vamos a intentar utilizarlas y estamos trabajando en ello desde hace semanas", dijo, al ser preguntado por esa iniciativa parlamentaria.

El tercer error, reconocen algunas fuentes de Vox, fue no apoyar los presupuestos de la Comunidad de Madrid. El argumento de que el PP no admitió a trámite unas enmiendas que habían sido presentadas fuera de plazo parece más propio de leguleyos que de políticos. Ese fue, precisamente, el motivo de la bronca entre Losantos y Monasterio, una querrela de familia, ya que el locutor se confesó votante de Vox. Al día siguiente, el portavoz del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, atribuyó la supuesta hostilidad de Losantos a que "muchos medios tienen miedo a que su financiación esté en entredicho". El sábado, Abascal intentó zanjar el asunto asegurando que políticos y periodistas pueden criticarse recíprocamente y acusó al Gobierno de "intentar comprar a los medios de comunicación con el dinero de todos". Pero Espinosa no aludía al Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino al de Díaz Ayuso.

En el haber de Vox está el éxito de la concentración de Cibeles. Aunque el partido no la convocaba directamente, sí lo hacían su sindicato (Solidaridad) y su fundación (Disenso). Abascal, único líder nacional que acudió, fue recibido en olor de multitudes. Una vez más, Vox protagonizaba una convocatoria en defensa de la Constitución, aunque dicha formación rechace el Estado autonómico y vulnere la libertad de prensa. El manifiesto leído al final del acto llamaba a la unión de "los partidos comprometidos con el orden constitucional y la soberanía indivisible de la nación". Excluido el PSOE y con Ciudadanos en vías de desaparición, era una invitación al pacto entre PP y Vox que Abascal anhela.

<https://elpais.com/espana/2023-01-22/abascal-presiona-a-feijoo-para-que-lo-accepte-como-socio-pese-a-la-polemica-de-castilla-y-leon.html>

UNA JUEZ DE SALAMANCA REPROCHA A FEIJÓO QUE NO ACUDA A DECLARAR: "EL CITADO ERA ÉL; QUE HUBIERA VENIDO A DECIRME QUE NO SABE NADA"

El líder popular desoye la citación como demandado en la causa abierta tras denunciar un grupo de afiliados críticos del PP el reiterado retraso de un congreso provincial del partido. Los demandantes piden sanciones al dirigente

La ausencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el juzgado de primera instancia 5 de Salamanca ha molestado a la jueza que lleva el caso. El líder de la oposición estaba citado a la vista como demandado, en calidad de máximo representante de la formación conservadora, tras la demanda civil que presentó un grupo de afiliados críticos del PP charro al no haberse convocado un congreso provincial del partido. La magistrada ha reprochado a los

representantes del PP que hayan decidido “de forma unilateral” que “no es pertinente que [Feijóo] acuda a este juzgado”, alegando que no era el presidente del partido cuando ocurrieron los hechos. “Era él el que estaba citado”, ha afirmado la jueza. La decisión judicial es clave, porque el congreso salmantino de los populares se lleva retrasando año y medio. La vista estaba convocada para determinar si se debería imponer al PP, como medida cautelar, la convocatoria del congreso antes de las elecciones municipales, tal y como reclaman los críticos. Salamanca es el bastión del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que fue alcalde de la ciudad entre 2011 y 2018.

La formación que preside Feijóo anunció este jueves que su dirigente no se iba a personar ante el tribunal esta mañana, como estaba citado. En su lugar, Feijóo ha acudido esta mañana a la feria de turismo Fitur, adonde también ha ido Mañueco. El comunicado de los conservadores argumentaba que “no era presidente [del PP] en el momento en que se produjeron los hechos analizados” y dieron a conocer que en vez de él iría al juzgado “personal técnico del partido al tanto de los datos requeridos”. Según el partido, los hechos que se analizan están “referidos a un congreso provincial de 2017”, si bien la demanda de los críticos no se remite a ese sino al de 2021, que sigue aplazado pese a que los estatutos de la formación recogen que debería haberse convocado en fecha y forma.

El fiscal del caso ha comprendido que Feijóo se ausentara por los motivos esgrimidos por los suyos, mientras que el abogado de la parte demandante ha requerido que al político se le impongan las “sanciones oportunas”. Además, ha explicado que cuando se produjo este retraso en la convocatoria del congreso provincial, pendiente desde 2021, Feijóo no presidía el PP, pero sí formaba parte del comité ejecutivo de su partido. Por ello estiman que podía estar al tanto de por qué se aplazaba tanto el cónclave salmantino.

La jueza, que fue quien decidió la citación del líder del PP, no ha ocultado su malestar. “Si el señor Feijóo no se ha personado esta mañana, es porque no lo ha estimado conveniente, porque el que estaba citado era él, no el señor que está en frente de mí [en relación a los representantes legales que ha enviado el partido]; es el PP el que entiende que no tiene que atender a la citación de este juzgado”. Y ha continuado: “Es el PP el que decide que no tiene nada que aportar. Entonces, la persona que estaba citada, el señor Feijóo, que hubiera venido y me hubiera dicho ‘no sé nada de este asunto, no puedo informarle de nada’”.

La vista ha abordado, pese a faltar Feijóo, los motivos de el PP para no haber convocado todavía el congreso. Los representantes del partido han justificado la tardanza en que en aquella época, en primavera de 2021, aún había importantes brotes de coronavirus y que no era sanitariamente seguro realizar esa clase de encuentros de manera presencial. El abogado de los afiliados críticos, que han afeado también que el líder de la oposición decidiera no presentarse, ha respondido que en las semanas y meses posteriores a esas fechas, el PP celebró ordinariamente congresos provinciales en otros lugares de Castilla y León, pero no en el caso de Salamanca. El letrado de los conservadores también ha asegurado que la gestora que dirige ahora mismo el partido en la provincia podría convocar el congreso pronto y ha argüido que “los recursos del partido tienen que destinarse a ganar las elecciones municipales de 2023 y convencer a los 300.000 habitantes de Salamanca”.

La sesión se ha centrado largo rato en la cuestión de fondo de la ausencia de Feijóo, hasta el punto de que la jueza ha apremiado al letrado del PP mientras este se quejaba de las “descalificaciones impertinentes” del otro jurista: “Céntrese en la medida cautelar”. La medida cautelar que solicitan los demandantes es la convocatoria del congreso provincial, lo cual podría cambiar los liderazgos del partido en Salamanca, bastión del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP). La gestora que lo domina ha sido “elegida a dedo”, según los críticos, porque la administran afines al dimitido expresidente del PP provincial Francisco Javier Iglesias. El fiscal se ha mostrado en contra de que se aplique la medida que piden los críticos: “¿Qué se pretende? Se pide en la cautelar [la convocatoria inmediata del congreso] el fondo de la demanda [que se convoque el congreso] y eso no puede ser”.

<https://elpais.com/espana/2023-01-20/una-juez-de-salamanca-reprocha-a-feijoo-que-no-acuda-a-declarar-el-citado-era-el-que-hubiera-venido-a-decirme-que-no-sabe-nada.html>

WERT, DEL MAYOR RECORTE DE BECAS DE LA HISTORIA A “REESTIMAR” EL CIS PARA FEIJÓO

El que fuera el ministro peor valorado de la historia democrática de España, titular de Educación con Rajoy que provocó siete huelgas en cuatro años, forma parte del equipo secreto que asesora al líder del PP al margen de la estructura orgánica

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene un equipo de asesores externos al margen de la estructura orgánica de su partido del que se desconocen la mayoría de los nombres y funciones que desempeñan. Uno de ellos es el exministro de Educación José Ignacio Wert, responsable del mayor recorte de becas de la historia y que ahora ejerce como asesor sociológico del dirigente gallego. Es, por ejemplo, quien “reestima” los barómetros del CIS para que Feijóo pueda luego decir que en realidad está 8,5 puntos por delante de Pedro Sánchez en la estimación de voto.

La labor de Wert (Madrid, 1950) era desconocida para el público hasta ahora, pero el PP movió este miércoles un documento con esa “reestimación” del CIS. Y en los metadatos del PDF aparece un nombre incontrovertible como autor: José Ignacio Wert Ortega. El Confidencial ya informó el pasado mes de noviembre de la incorporación del exministro al equipo externo de Feijóo, pero hasta ahora no había trascendido su ocupación concreta. Desde la dirección del PP aseguran que “Wert colabora con el partido aportando análisis, documentos, papeles. Igual que otros dirigentes de este y de otros partidos”.

El exministro, licenciado en Derecho, tiene un amplio currículum en el campo de la sociología, en el que ha desarrollado buena parte de su carrera tras pasar por el hoy denominado Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Fundó la empresa Demoscopia, trabajó para Sofres, y fue alto ejecutivo del Grupo Prisa o del BBVA, entre otros cargos.

Pero el supuesto prestigio en el sector privado con el que llegó a primera línea política contrasta con la pésima valoración que cosechó en su paso por el primer Gobierno de Mariano Rajoy, del que se tuvo que marchar antes de tiempo tras concitar el rechazo de casi todo el mundo. Y no solo fuera del PP.

Los primeros problemas le surgieron precisamente en el partido para el que ahora trabaja. Pronto hizo gala de ser uno de esos versos libres que, en política, triunfan casi a la misma vez que su brillo se desvanece cuando patinan y, de repente, no tienen a nadie para protegerlos, cuidarlos o advertirles de que ese no es el camino. Ocurrió, por ejemplo, cuando en octubre de 2012 dijo aquello de “Nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes”.

Hubo más. Wert despreció a la educación pública desde el Ministerio de Educación, negó la existencia de problemas económicos en las familias para pagar los crecientes costes de la educación universitaria, despreció el esfuerzo de quienes eligen una carrera por vocación y apostó por la “empleabilidad”, aplaudió la fuga de talento joven que marcó la crisis de hace una década, defendió la segregación de niños y niñas en la escuela o consideró una “fiesta de cumpleaños” las masivas y continuas protestas contra él.

Esa “fiesta de cumpleaños” tuvo un nombre: Marea Verde. Una de las muchas expresiones de movilización social que nacieron al calor de las durísimas medidas de recortes en servicios públicos que pusieron en marcha los gobiernos en diferentes niveles administrativos: desde los de 2010 de Zapatero, a los de 2012 de Rajoy, pasando por otros que, con la excusa de la crisis, aceleraron en su agenda neoliberal de desmontaje del Estado de bienestar.

La actual ley educativa, aprobada en diciembre de 2020 por el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, puso fin al régimen nacido de su predecesora, la ley Wert, aprobada únicamente con los votos de un PP al que luego se le llena la boca de reclamar “consensos” cuando está en la oposición. Entre los principales descalabros que provocó la gestión de Wert estuvo también un sistema de becas que dejó de servir como “ascensor social” para pasar a dar más peso a las notas del alumno frente a su situación socioeconómica.

Sucesivas promociones universitarias sufrieron los nuevos baremos. En 2020, último año de aplicación de la ley Wert, 45.000 alumnos se quedaron sin la ayuda que les hubiera correspondido si se hubiera tenido más en cuenta su renta. No contento, también quiso legislar contra otros becarios, los que sostienen en buena medida la productividad de muchas empresas. La ministra Isabel Celaá acabó con el sistema nada más acceder al Gobierno, ese

mismo 2020.

El ministro quiso eliminar la cotización social de las prácticas académicas curriculares remuneradas, por lo que aquellos jóvenes que encadenaban uno tras otro este tipo de contratos (en un momento en el que la precariedad laboral, y un 55% de paro juvenil, impedía rechazarlos) podían acumular años de trabajo con escaso sueldo y sin haber cotizado nada para su futura jubilación, o en caso de invalidez o enfermedad.

Wert llegó al Ejecutivo con la vitola de independiente, pese a que llevaba años trabajando para el PP, y muchas expectativas entre determinados sectores mediáticos y económicos con los que había tenido relaciones en el pasado. Pero ni siquiera llegó al final de la legislatura, aunque casi. Salió de noche, sustituido por un secretario de Estado de otro ministerio y con una nota bastante más baja de la que él exigía a los alumnos con problemas económicos para seguir estudiando: un 1,56.

Su salida, como unos meses antes la de Gallardón, se celebró como un triunfo del ciclo de movilizaciones sociales que comenzaron a finales de la primera década del siglo, confluyeron en el 15M y se expandieron por todo el territorio y sectores. Las elecciones estaban a la vuelta de la esquina y los augures demoscópicos vaticinaban un escenario inédito en España: la ruptura del bipartidismo, que llegó en diciembre de 2015.

Para entonces, Wert ya era exministro. Pero su salida por la puerta de atrás le deparó un destino de fantasía: embajador de España ante la OCDE. De fantasía porque, pese a su 1,56 de nota media final, suponía vivir en París con un sueldo de 60.000 euros anuales más complementos, gastos de representación, coche con chófer y residencia, con un coste de 11.000 euros al mes. Además, coincidencia, logró el puesto perfecto para acompañar a su pareja, Montserrat Gomendio, quien había sido su número dos en el Ministerio de Educación y que dimitió unos meses antes de la destitución de Wert. Su destino: la OCDE en París.

El sociólogo vuelve ahora a un puesto que ya ocupó. Antes de ser ministro, Wert pasó años junto a Pedro Arriola, el principal asesor en materia demoscópica de Mariano Rajoy (y de muchos otros antes), e incluso escribiendo los discursos al expresidente. Entonces, su labor fue secreta. Ahora, también.

https://www.eldiario.es/politica/wert-mayor-recorte-becas-historia-reestimar-cis-feijoo_1_9881138.html

FEIJÓO Y EL ABORTO: NI SÍ NI NO, NI TODO LO CONTRARIO

El líder del PP se ha desmarcado de las posiciones más inmovilistas en su partido al tiempo que en Galicia patrocinaba a grupos provida

Feijóo: "En ningún lugar donde gobierne el PP se puede coaccionar a una mujer durante su embarazo"

Descifrar a Alberto Núñez Feijóo resulta a menudo como desenredar un acertijo. Su posición ante el aborto ofrece una muestra elocuente. El líder del PP ha sido capaz de oponerse a las posiciones más inmovilistas dentro de su partido y a manifestarse a favor de la ley de plazos que los populares recurrieron de inconstitucionalidad hace 12 años, al tiempo que en Galicia ha prestado cobertura legal y apoyo económico a grupos que se distinguen por combatir la legislación actual sobre la interrupción del embarazo.

La primera ley que aprobó el Parlamento gallego después de que el PP de Feijóo conquistase la mayoría absoluta en 2009 fue una iniciativa legislativa popular impulsada por el Foro de la Familia -que había encabezado las protestas contra el Gobierno de Zapatero tras la aprobación de la normativa vigente hasta hoy- y un grupo próximo a él, la Asociación Red Madre. Esa ley, que regula una "red de apoyo a la mujer embarazada", en su artículo primero establece el objetivo de "preservar el derecho de la mujer gestante" a culminar su maternidad y a ser informada "de los programas y mecanismos dispuestos a su favor, así como del derecho a la vida en formación desde su concepción".

La ley, todavía en vigor en Galicia, compromete a la Administración gallega a dar todo tipo de respaldo social y económico a las mujeres encinta. Desde su aprobación, y amparándose en ella, la Red Madre se desplegó en esa comunidad con el patrocinio económico y el respaldo

político de la Xunta. Feijóo asistió a eventos organizados por la asociación, que ha tenido además estrechos contactos con el departamento de Igualdad del Gobierno gallego. Ese apoyo económico se ha mantenido hasta la actualidad. Desde entonces la asociación ha recaudado más de 430.000 euros en subvenciones del Gobierno gallego, casi 300.000 solo en los últimos cuatro años, según datos extraídos del Ministerio de Hacienda y del Diario Oficial de Galicia. En 2019, la Red Madre también fue adjudicataria de uno de los locales repartidos mediante concurso público por la Xunta en su edificio administrativo de Pontevedra para uso de colectivos sociales

La Red Madre mantiene públicamente una inequívoca posición contra las leyes de interrupción del embarazo. “Las presiones para abortar que reciben las mujeres son escandalosas”, declaró el pasado marzo su directora, Amaya Azcona, a El Debate, el diario digital patrocinado por la Asociación Católica de Propagandistas. En su página web proclama como objetivos “asesorar a toda mujer sobre cómo superar cualquier conflicto que un embarazo le pueda suponer” e “impulsar y promover en la sociedad la cultura de la vida, así como la defensa de la maternidad”. En su memoria de actividades de 2021, manifiesta que atendió en toda España a 58.600 mujeres y asegura que logró evitar que el 83% de las que querían abortar mantuviesen su propósito.

Entre las gestantes que reciben apoyo de la asociación hay mujeres inmigrantes y en situación de precariedad social, por lo que la Red también ha recibido subvenciones de alguna Administración dirigida por el PSOE como el Gobierno de Aragón. Pero el grueso de sus ayudas públicas proviene de instituciones gestionadas por el PP, con la Xunta de Feijóo en primer lugar.

En sus pasos iniciales en el Gobierno autónomo, el actual líder del PP protagonizó un choque con el Ejecutivo de Zapatero tras la aprobación de la ley de interrupción del embarazo. La Xunta anunció en 2010 que en el sobre que, según la nueva norma, las Administraciones deberían entregar a las solicitantes de aborto con información sobre las ayudas a las que tendrían derecho iba a incluir algunas observaciones a fin de disuadirlas de su propósito. El Gobierno central amenazó con un conflicto y el de Feijóo desistió del plan.

Solo tres años después, el presidente gallego disintió en público del proyecto del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de recortar la ley de Zapatero. En 2019, tanto la Xunta como el PP gallego se desmarcaron también de la posición de Pablo Casado de reformar la ley en sentido más restrictivo. “La legislación actual es adecuada”, sentenció la responsable de Igualdad del Gobierno de Feijóo, Susana López Abella. La última posición conocida del ahora líder del PP es que debe mantenerse la ley pero elevando de 16 a 18 años la edad hasta la que es necesario el consentimiento paterno para abortar.

<https://elpais.com/espana/2023-01-19/fejoo-y-el-aborto-ni-si-ni-no-ni-todo-lo-contrario.html>

EN LA MODERACIÓN DE FEIJÓO CABE TODO, DE SÉMPER A LOS TRÁNSFUGAS SAYAS Y ADANERO

El PP del dirigente gallego abre las puertas a fichajes de cualquier partido para sumar votos y escaños contra Sánchez

Las puertas del PP siempre están abiertas. No es una frase más, que se repite sin cesar, es el lema práctico y sin aparente ideología del PP de Alberto Núñez Feijóo. En el plazo de apenas una semana, el PP de Feijóo ha fichado a los moderados y liberales Borja Sémpér e Íñigo de la Serna, casi socialdemócratas, como son crucificados por la ultraderecha política y mediática, para cubrir la cuota electoral más transversal y colindante con el PSOE más centrado, y a los diputados tráfugas de la Unión del Pueblo Navarro (UPN), Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que se han destacado en sus intervenciones en el Congreso en este mandato por dejar como hermanitas de la caridad a la sección más ultra de Vox. Todo vale para el convento popular de Feijóo.

Adanero y Sayas, da igual cuál sea el asunto del orden del día, siempre acusan al Gobierno de Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso de haberse entregado al terrorismo de Otegi y ETA, de haber traicionado y vendido España y de estar en manos de Bildu. Ese es su programa y lo que le reprocharon a su partido, UPN, cuando traicionaron la disciplina de voto y se adhirieron al PP para intentar tumbar hace casi un año la votación de la nueva reforma laboral. En sus discursos, siempre muy encendidos, obtienen eco y atronadores aplausos de las bancadas de Vox y de los más radicales en las filas de Ciudadanos y del PP, con especial

sintonía con Cayetana Álvarez de Toledo. Este martes, Álvarez de Toledo tuiteo: “Dos políticos y parlamentarios de primera. Una esperanza para Navarra y un éxito para el PP”.

Sayas y Adanero aún no tienen el carné del PP. Van por fases. En UPN los sancionaron con dos años y medio de suspensión por su deslealtad, pero ellos ya se consideran expulsados, aunque no han entregado a otros compañeros su escaño en la Cámara baja. Tampoco está claro en qué lista irán o si repetirán los dos, porque Navarra Suma, la extinta coalición allí entre UPN, PP y Cs, solo tuvo dos diputados en las últimas elecciones generales y las encuestas dejan casi como extraparlamentarios a los populares si compiten en solitario. UPN y PP se han declarado la guerra, en otro territorio del norte pirenaico de España en el que los populares son irrelevantes. UPN tomó nota de los datos de sus encuestas internas y constató que les convenía más competir solos, porque el PP de Feijóo, Sayas y Adanero les restaba credibilidad para atraer votantes desengañados del socialismo más templado.

Esa disputa por ensanchar el partido y atraer al elector más ponderado y prudente del PSOE estaba en el propósito del fichaje de Sémper, De la Serna y otros perfiles que irán incorporándose del sorayismo, esa inexistente corriente interna del PP más gestor que se creó y fracasó para el congreso de las primarias exprés del PP en julio de 2018 en las que enamoró el entusiasmo juvenil de Pablo Casado y su troupe. El lunes, en una entrevista en La Razón, uno de sus medios conservadores de referencia, Feijóo confirmaba a su manera y por la vía indirecta su interés por Begoña Villacís o Inés Arrimadas al dejar caer que el titular del periódico que apostaba por esas incorporaciones selectivas desde Cs no estaba mal apuntado. Fue la melodía apaciguadora que le funcionó a Juanma Moreno en Andalucía para desconectar la estrategia del miedo y emplazarse como el barón con más futuro del PP, la contraria al método de la confrontación que tanto cultiva la madrileña Isabel Díaz Ayuso. Las dos fórmulas le sirven a Feijóo, aparentemente sin distinción.

Un importante dirigente del PP, con buena sintonía con Feijóo y que respalda ese reforzamiento del equipo con la recuperación de sorayistas preparados, centristas y contrastados, desaconsejaba estos días la captación de Sayas y Adanero por razones más efectivas que ideológicas: “Antes o después, si el PP quiere pintar algo en Navarra, tendrá que entenderse con UPN y el fichaje de esos dos diputados nos dejaría en una situación terrible”. El mensaje se le hizo llegar a Miguel Tellado, el vicesecretario de Organización y mano derecha en la estructura interna del PP de Feijóo. No hizo ni caso.

<https://elpais.com/espana/2023-01-18/en-la-moderacion-de-feijoo-cabe-todo-de-semper-a-los-transfugas-sayas-y-adanero.html>

FEIJÓO REMODELA LA DIRECCIÓN DEL PP EN PLENO DERRUMBE DE SU VALORACIÓN

El líder de la oposición arranca el año electoral con una reforma de su 'ejecutiva' para incidir en perfiles supuestamente “moderados” apenas nueve meses después de llegar a la cúspide de su partido y cuando su nota solo sube entre los votantes de Vox

El 'efecto Feijóo' se ha evaporado. Las encuestas constatan que la valoración del líder del PP se estancó hace meses y que, en los últimos, no ha parado de caer. En este contexto y tan solo nueve meses después de llegar a la presidencia del partido, Alberto Núñez Feijóo ha ejecutado la primera remodelación de su dirección reclutando a perfiles más centristas –como Borja Sémper, Íñigo de la Serna o Daniel Sirera– con la intención de ofrecer una imagen más moderada. El cambio coincide con el inicio de un trepidante año electoral en el que se renovará buena parte del poder institucional español y en el que el PP pugna con Vox por lograr el respaldo del electorado de derechas, pero también busca al votante de centro en los restos de Ciudadanos y entre españoles descontentos con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. La valoración de Feijóo ha caído, no obstante, entre los votantes de prácticamente todas las fuerzas políticas, incluidos los del PP. La única excepción son los de Vox, entre quienes experimentó un repunte en el tramo final del año.

La euforia (real) de hace menos de un año en la sede de la madrileña calle Génova no casa con la euforia (impostada) de este arranque de 2023 en el que el dirigente gallego se lo juega todo. Feijóo comenzó su mandato con una buena percepción entre los votantes de todos los partidos. Pero rápidamente sufrió un descenso que, más o menos pronunciado, no se ha detenido. Si en el inicio del segundo trimestre de 2022 Feijóo aprobaba para un 42,6% de los españoles, en enero de 2023 este porcentaje se ha derrumbado al 24,8%, según los sondeos de Simple Lógica para elDiario.es.

Hace un año, y ahora, la mejor valoración está, obviamente, entre los suyos: en abril de 2022, el 73,9% de los votantes aprobaba a su líder. Hoy, ese porcentaje ha caído al 65%. La caída es mucho mayor entre quienes recuerdan haber votado a opciones progresistas en 2019. Un 47,75% de los votantes que recordaban haber elegido al PSOE en 2019 tenía una buena opinión del entonces presidente de la Xunta de Galicia. Hoy, ese porcentaje se ha ido al 15,3%. Entre los electores de Unidas Podemos la progresión es similar: del 34,8% al actual 6,6%.

La tendencia de descenso se ha corregido un poco en el último tramo de 2022 y el arranque de 2023 en el caso de la ultraderecha. El mandato de Feijóo comenzó entre los votantes de Vox con una aprobación del 41,8%, que escaló hasta un 59% en julio del año pasado coincidiendo con la ruptura de las negociaciones para renovar el CGPJ.

Pero a la vuelta del verano, su popularidad se hundió hasta el 35,3%. Coincidió con el primer cara a cara largo con Pedro Sánchez en el Senado, en el que Feijóo ofreció al presidente del Gobierno su apoyo "puntual". Anatema para la ultraderecha, según se ve en la evolución de su valoración entre los votantes que se reconocen en Vox, que comenzó a repuntar en noviembre. Justo cuando el PP volvió a romper con el Ejecutivo y Feijóo dijo aquello de "los pactos de Estado llegarán con otro PSOE".

Después llegó la reforma del Código Penal, la polémica por la aplicación de la ley del 'solo sí es sí' y los intentos del PP de torpedear la renovación del Tribunal Constitucional. Hoy, la valoración de Feijóo entre los votantes de Vox es del 46,3%, más que cuando asumió su cargo.

Quizá en estos datos se esconden los motivos de la entrada de Borja Sémper en el Comité de Dirección. Un cambio muy relevante en la cúpula del PP apenas nueve meses después de su nombramiento.

Relevante porque supone recuperar a una figura política que se fue a la empresa privada harto de la influencia de Vox en el discurso de su partido y vuelve ahora que ambos gobiernan en coalición en Castilla y León con los derechos de las mujeres en el punto de mira. De hecho, el pasado lunes Sémper compareció ante los periodistas tras la reunión del Comité de Dirección del PP, pese a que fue presentado el lunes anterior como "portavoz de la campaña" del partido.

La realidad es que Sémper ejerce como portavoz de la dirección del PP, en contra de la apuesta inicial de Feijóo, quien expresamente renunció a tener un único rostro asociado a su cúpula. Desde que fue elegido líder, se han turnado en el puesto su secretaria general, Cuca Gamarra, el coordinador general, Elías Bendodo, y vicesecretarios generales, especialmente Esteban González Pons y Juan Bravo.

Pero hasta ahora solo él era el portavoz del partido. Feijóo era, o estaba llamado a ser, la cara del "nuevo" PP, moderado, centrado, "ni de izquierdas ni de derechas", gestor, amable y cualquiera de los epítetos que la sociología tradicional recomienda a los candidatos.

Tras nueve meses en primera línea, varios cara a cara con el presidente Pedro Sánchez en el Senado, la ruptura de las negociaciones para renovar el CGPJ, los señalamientos al Tribunal Constitucional (a cuyo nuevo presidente, Cándido Conde-Pumpido, no considera "adecuado") y la asimilación de parte de la agenda de Vox, en el PP han detectado que necesitan reforzar ese perfil porque su líder ya no es suficiente.

Y han aprovechado la polémica de Castilla y León, todavía viva, para intentar poner tierra dialéctica de por medio con Vox. Pero solo de palabra. La mano derecha de Feijóo en los territorios, su hombre fuerte para controlar lo que pasa en cada sede de cada rincón de España, Miguel Tellado, dijo este martes que el acuerdo de gobierno de coalición de Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo "no está en peligro".

Pese a que el presidente autonómico y el vicepresidente se han llamado mentiroso el uno al otro, y pese a las palabras que dirigentes del PP y de Vox se han cruzado en los últimos días, las elecciones del 28 de mayo están lo suficientemente cerca, y la dependencia mutua es tal, que romper no parece ahora mismo una posibilidad siquiera remota. Y eso que Sémper dijo que el Gobierno que lidera su compañero Mañueco no es "sensato".

Al final, y pese a los intentos de Feijóo por desentenderse del conflicto abierto por los derechos de las mujeres, el presidente del PP tuvo que salir al paso e intentar reducir a una mera cuestión de “competencias” las profundas discrepancias con Vox que, de paso, han vuelto a aflorar las históricas contradicciones de la derecha acerca del aborto.

Feijóo precisamente modificó durante la entrevista en Telemadrid la posición de su partido sobre el aborto 13 años después del recurso de constitucionalidad contra la ley de plazos. El líder del PP dijo que la única discrepancia con la ley está en la posibilidad de las mujeres de 16 y 17 años de abortar sin el consentimiento paterno. El recurso del PP, que por fin estudiará el tribunal de garantías de forma inminente, iba mucho más allá de eso.

Feijóo, lejos de los problemas de la gente

El sondeo de Simple Lógica para elDiario.es revela además que la mayoría de los encuestados considera que Feijóo no “entiende los problemas de los españoles”. Un 46,5% desaprueba al líder de la oposición en este aspecto, por un 20,2% que le aprueba.

Además, los españoles tampoco ven con buenos ojos cómo ha gestionado Feijóo los acercamientos al Gobierno para intentar alcanzar algún acuerdo con el PP. Casi la mitad de los encuestados lo desaprueban.

El líder del PP tampoco aprueba en el que ha intentado que sea su tema estrella ante los españoles, la economía. El 45,7% desaprueba “la actuación de Alberto Núñez Feijóo proponiendo medidas para mejorar la economía de los ciudadanos”.

Solo el 20,6% la aprueba. Incluso un 29,7% de los votantes de Vox no están cómodos con las propuestas del PP, que ha visto cómo los resultados positivos de las diferentes medidas aprobadas por el Gobierno de coalición, y que siempre han sido despreciadas por el líder de la oposición, han conseguido paliar al menos en parte los problemas derivados de la pandemia, primero, y de la guerra de Ucrania, después.

https://www.eldiario.es/politica/fejoo-remodela-direccion-pp-pleno-derrumbe-valoracion_1_9873855.html

LOS DIPUTADOS TRÁNSFUGAS DE UPN SAYAS Y ADANERO SE INCORPORAN AL PP: “HEMOS CREADO UNA ALTERNATIVA REAL”

El PP ha decidido “abrir las puertas” de su partido para trabajar “de forma coordinada en la configuración de un proyecto competitivo que frene los ataques a una comunidad en la que gobierna el PSOE gracias al apoyo expreso de Bildu”

La dirección del PP de Navarra y los diputados Sergio Sayas y Carlos Adanero han llegado a un acuerdo para que formen parte de las listas del partido de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023.

“Con este acuerdo hemos logrado ofrecer a los navarros una alternativa fuerte y real en el centro derecha para plantar cara a los gobiernos de Chivite apoyado por EH Bildu en Navarra y también a lo que es el 'sanchismo' y lo que representa para todo nuestro país”. Con estas palabras Sergio Sayas ha comenzado la rueda de prensa que ha hecho pública su adhesión y la de su compañero de plataforma Carlos Adanero a las listas del PP. “Creo que muchos votantes de centro derecha que se sentían huérfanos van a agradecer que frente quienes han querido dividir el centro derecha, hayamos sido capaces de entendernos y de ofrecer una alternativa fuerte y real”, ha proseguido.

Adanero, que ha intervenido tras Sayas, ha recalcado que el centro derecha “tenía que creerse una alternativa real y no un mero apéndice de los gobiernos que había”. “Hoy es un paso importante para aglutinar. Lo que hay que hacer con el 'sanchismo' es ganarle democráticamente en las urnas para que abandonen Navarra y el Gobierno de España”, ha indicado.

Por su parte, Javier García, presidente del PP en Navarra, ha señalado que tanto para Navarra como para “el centro derecha” hoy es “un buen día”. “Hoy se presenta la unidad para ser alternativa y combatir a un gobierno de la señora Chivite con los nacionalistas. Es un día importante porque firmamos un acuerdo de colaboración entre el PP y la plataforma navarra

para caminar juntos hacia el objetivo, que es una Navarra mejor”, ha explicado.

Sin embargo, los diputados han confirmado que no se han afiliado al PP. “Por el momento hemos firmado el acuerdo, pero no ha habido ninguna afiliación, aunque no lo descartamos en ningún caso”, ha informado Adanero, quien ha recalcado que por el momento “están trabajando” en la conformación de las listas, pero que no disponen de la información al respecto.

Tras el anuncio por parte de UPN de que acudirá en solitario a las próximas elecciones forales y municipales de mayo de 2023 dando por rota la coalición Navarra Suma, el PP ha decidido “abrir las puertas” de su partido en la comunidad foral a todos los “navarros y españoles que apuesten por un modelo de unidad del centroderecha y no de división”, también a los dos diputados tráfugas Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que fueron expulsados de UPN por desobedecer a la dirección de su partido y votar en contra de la reforma laboral del Gobierno.

Según han detallado desde el PP navarro, el objetivo del acuerdo con los diputados es “trabajar de forma coordinada en la configuración de un proyecto competitivo que frene los ataques a una comunidad en la que gobierna el PSOE gracias al apoyo expreso de Bildu”. “La voluntad de entendimiento entre la plataforma de los dos diputados navarros y el PP de Navarra es amplia. El objetivo es aglutinar el voto de centro derecha, pero también lograr el de aquellas personas que no quieran para la comunidad foral un Gobierno del partido de Pedro Sánchez con el apoyo del partido de Arnaldo Otegi”, han anunciado.

https://www.eldiario.es/navarra/diputados-transfugas-upn-sayas-adanero-incorporan-pp-hemos-creado-alternativa-real_1_9872318.html

EL FANTASMA DE LA CORRUPCIÓN PERSIGUE A FEIJÓO EN SU AÑO ELECTORAL

Solo en la primera mitad de año desfilarán por los banquillos viejos cargos conservadores en el marco de 'Lezo', 'Púnica', 'Gürtel', 'Taula' o 'Novo Carthago'

También están pendientes de que se fije fecha de juicio el 'caso Rato', en el que se acusa al exministro de haber tenido un patrimonio oculto al fisco, y 'Erial', donde Anticorrupción pidió para Zaplana 19 años de cárcel

Aunque las encuestas le sitúan en cabeza, el camino hasta las urnas puede terminar haciéndose muy largo. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se enfrenta a su año electoral con el viento demoscópico a favor pero con la losa de la corrupción pesando aún sobre las espaldas de su formación. A pesar del silencio decretado sobre lo que han calificado como "cuestiones pasadas", al principal partido de la oposición, triplemente condenado por beneficiarse de algunas de estas tramas corruptas, no le quedará más remedio que seguir viendo cómo algunos de sus viejos cargos desfilan por los tribunales con la cita con las urnas como telón de fondo. Incendios judiciales con focos repartidos a lo largo y ancho de la geografía española, desde Murcia hasta Valladolid pasando por la Comunitat Valenciana y Madrid.

De todos los frentes, es Púnica el que marca el inicio de año. La Audiencia Nacional acaba de reanudar las vistas de la llamada pieza leonesa. Es la segunda de la macrocausa que se lleva a juicio. Y se centra en los trabajos de reputación online que Alejandro de Pedro hizo para diferentes políticos del PP, con los que se pretendía, según Anticorrupción, mejorar el perfil público de los dirigentes neutralizando "las noticias negativas". En el banquillo se sientan, además de De Pedro, el expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez, a quien un agente de la UCO de la Guardia Civil ha acusado de urdir un entramado de intereses para perpetuarse en el cargo, el alcalde de Puebla de Lillo (León) y el exregidor de Cartagena José Antonio Alonso. Sobre la mesa, delitos de fraude, malversación o tráfico de influencias.

Un mes de enero que también estará marcado por el juicio de la quinta pieza de Gürtel, que se ha retrasado por falta de espacio en la Audiencia Nacional y que se alargará hasta mayo. Es el último caso que acorrara al expresidente valenciano Francisco Camps tras salir indemne de más de una década de procesos judiciales. Bajo la lupa, la contratación con una de las empresas de la trama para instalar el stand de Fitur. A ojos del juez instructor existe "un arsenal de indicios" para señalar que Camps, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de dos años y medio de cárcel, "participó en el direccionamiento" de la licitación a favor de Orange Market para premiar su "paciencia y resignación" ante el "impago de la multimillonaria deuda" que el PP valenciano tenía con ella.

'Taula', 'Lezo' y 'Novo Carthago'

También con epicentro en suelo valenciano está previsto en los primeros meses de año el juicio de dos líneas de investigación del caso Taula. La primera es la relativa a las presuntas contrataciones irregulares en un par de empresas públicas, mientras que la segunda se centra en el supuesto amaño de la licitación para la gestión de un call center que, según Anticorrupción, habría permitido el desvío de más de 200.000 euros en beneficio de terceras personas. En ambos casos se sentará en el banquillo de los acusados el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y Marcos Benavent, el conocido como yonqui del dinero. Además de ellos, en la primera de las causas también estará presente el exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio.

El foco también estará puesto, durante el primer semestre del año, en Novo Carthago y Lezo, el caso que estalló tras la detención hace ya un lustro del expresidente madrileño Ignacio González. El primero de los juicios está previsto que se prolongue durante dos meses, entre finales de febrero y finales de abril. Y versa sobre las posibles irregularidades cometidas en relación a un proyecto urbanístico consistente en levantar miles de viviendas, hoteles y hasta un campo de golf en terrenos protegidos junto al mar Menor. Un asunto por el que se sentarán ante un tribunal dos consejeros de la época del conservador Ramón Luis Valcárcel al frente del Ejecutivo autonómico –Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana– y varios ex altos cargos en materia de urbanismo y medio ambiente.

En cuanto a Lezo, la Audiencia Nacional acogerá a partir de finales de mayo el primer juicio de una macrocausa que acumula media docena de piezas separadas. En concreto, la que se juzga es la primera, centrada en la adquisición por parte del Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa, una compra que habría estado, a ojos del juez instructor, "plagada de ilicitudes" y por la que se abonó un "sobreprecio injustificado". En el auto de apertura de juicio oral, el magistrado Manuel García Castellón envió a juicio a una veintena de personas, entre las que destacaban Pedro Calvo y Juan Bravo, exconsejeros del Ejecutivo madrileño durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón. Un expresidente madrileño que, como Ignacio González, también estuvo imputado en esta pieza pero que finalmente salió libre de polvo y paja.

A la espera de sentencias y fijación de nuevos juicios

También está previsto que en este año electoral pueda retomarse el juicio del caso Perla Negra, suspendido ya en dos ocasiones y centrado en la compra por parte de la Consejería de Economía de Castilla y León de un edificio y algunos terrenos para el fallido desarrollo de un polígono industrial. O dictarse la sentencia del caso Auditorio, cuyo juicio se celebró a finales del año pasado con el exlíder del Gobierno murciano Pedro Antonio Sánchez como principal acusado y que se centra en las supuestas irregularidades cometidas en el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras cuando Sánchez era el alcalde de la localidad.

A la espera de que se fije la fecha para el juicio, algo que se prevé para los próximos meses, están aún el caso Rato o Erial. En la primera causa se encuentra bajo la lupa el exministro de Economía Rodrigo Rato, al que se acusa de haber tenido un "patrimonio oculto" al fisco a través de un entramado de sociedades distribuidas en varios países con las que realizaba diferentes inversiones. En la segunda, que gira alrededor del supuesto cobro de comisiones derivadas de concesiones de ITV o parques eólicos, el expresidente de la Generalitat valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, para quien Anticorrupción solicita 19 años de cárcel por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa.

Del 'caso Villarejo' a la reforma del Código Penal o el 'sólo sí es sí'

Más allá de estas causas, el calendario judicial para 2023 será realmente apretado. En la Audiencia Nacional seguirá coleando todavía el caso Tándem, la macrocausa que tiene como piedra angular al excomisario jubilado José Manuel Villarejo y que acumula decenas de piezas separadas. Tres de ellas –Iron, Land y Pintor–, en las que se investigan los trabajos del viejo agente de las cloacas para un despacho de abogados o algunos empresarios, ya han sido juzgadas y están a la espera de sentencia. Otras como Kitchen, que versa sobre la operación de espionaje urdida desde el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, cuentan ya con auto de procesamiento pero están a la espera de la acusación de Anticorrupción.

De hecho, pendientes de ese escrito se encuentran, según Europa Press, las defensas de los principales procesados. Básicamente, porque intentarán utilizar la reforma del delito de

malversación a su favor. Cambios en el Código Penal que coparán buena parte de la atención jurídica. Primero, porque el Supremo, que aún tiene pendientes de resolver los recursos interpuestos contra los indultos del Gobierno a los líderes del procés, debe determinar cómo afecta la reforma penal a las penas de inhabilitación que aún pesan sobre los principales condenados por el 1-O. Y segundo, por el efecto que dichas modificaciones pueden tener sobre otras causas derivadas de aquel otoño caliente catalán que está todavía en los tribunales.

No es el único asunto candente en manos del Alto Tribunal. En los próximos meses se espera que empiecen a llegar los recursos que las partes puedan presentar contra la decisión de algunas Audiencias Provinciales de revisar a la baja castigos a violadores al calor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como ley del sólo sí es sí. Además, el Supremo tiene también sobre la mesa otros dos asuntos de gran relevancia pública. En primer lugar, deberá decidir si la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, acusada de desobediencia, debe ser juzgada en Barcelona. Y por otro lado, tendrá que continuar con la investigación del conocido como caso Casero, centrado en las presuntas irregularidades en contratos o acuerdos cuando el diputado del PP Alberto Casero era alcalde de Trujillo (Cáceres).

Otras muchas investigaciones también marcarán el presente año electoral. En la Audiencia Nacional aún colea, por poner algún ejemplo, el espionaje con el software Pegasus o el envío el pasado mes de noviembre de paquetes con material pirotécnico a diferentes instituciones.

https://www.infolibre.es/politica/fantasma-corrupcion-persigue-feijoo-ano-electoral_1_1402692.html

EL PP DE FEIJÓO BUSCA ENTRE TENSIONES CÓMO DESMARCARSE DE LOS EXCESOS DE VOX

El entorno del líder popular afirma sobre el acuerdo pactado con los ultras sobre el aborto que “quien tiene que dar explicaciones es el Gobierno de Castilla y León”

Alberto Núñez Feijóo no se ha pronunciado aún sobre el polémico acuerdo anunciado por el PP y Vox en el Gobierno de Castilla y León sobre medidas antiabortistas. Sin embargo, en su entorno sí salieron al paso de la nueva crisis con sus socios ultras en ese territorio para desmarcarse de la medida. Al conocerse la noche del viernes que Castilla y León instará a los médicos a ofrecer a todas las embarazadas las medidas pactadas con Vox, fuentes de la dirección nacional del PP afirmaron que “quien tiene que dar explicaciones es el Gobierno de Castilla y León”. La relación del PP de Feijóo con Vox sigue siendo tensa, no está resuelta y se vaticina aún más complicada en este año electoral, en el que todas las encuestas reflejan que tendrán que coaligarse si quieren tener alguna opción de gobernar frente a Pedro Sánchez. El líder ultra, Santiago Abascal, no para de lanzar guiños a Feijóo, quien ya no sabe cómo eludirlos. El PP y Vox negocian cómo concurrir juntos a otra manifestación contra Sánchez en la plaza madrileña de Colón el día 21 de este mes.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, aseguró a este diario el viernes por la noche que la instrucción pactada con Vox es que la Junta “instará” desde el lunes a los sanitarios a que ofrezcan a las embarazadas, incluidas las que quieran abortar, la posibilidad de escuchar el latido del corazón del feto, recibir asistencia psicológica y acceder a una ecografía 4D. Tras dos días en silencio, el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha negado el objetivo antiabortista del protocolo. El consejero de Sanidad afirma que la opción de escuchar el latido fetal, una ecografía 4D o asistencia psicológica se planteará a todas las mujeres encintas, incluidas las que deseen abortar.

El dirigente popular más claro y contundente contra Vox y las nuevas medidas antiabortistas pretendidas y anunciadas por portavoces de los dos partidos en la Junta de Castilla y León el jueves resultó ser el nuevo fichaje de Feijóo como portavoz de su campaña de las elecciones locales del 28-M, Borja Sémper. “No estamos dispuestos a tragar con cualquier cosa”, enfatizó por televisión el viernes. Y alertó: “El PP cuando no esté de acuerdo en algo lo va a decir”. Este aviso se tomó en el Partido Popular como una declaración de intenciones y de estrategia del entorno de Feijóo para intentar diferenciarse en lo que queda de este año electoral de futuras y previsibles nuevas diferencias con Vox en otros ámbitos.

El jueves, cuando se conoció el acuerdo anunciado por el vicepresidente de Vox en Castilla y León, Juan Gallardo, nadie en la cúpula del PP quiso pronunciarse. Tardaron varias horas en

enterarse bien del contenido de las medidas, escucharon las declaraciones del dirigente ultra y constataron con preocupación que a su lado había comparecido también el consejero portavoz del PP en la Junta. El viernes, tras el mutismo inicial de Feijóo y su equipo, solo la diputada nacional encargada de esos asuntos, Sandra Moneo, llamó directamente al consejero de Sanidad de esa comunidad, el también popular Alejandro Vázquez, para enterarse de primera mano si iba a cambiar algo en los protocolos establecidos por esa Consejería en relación con las prácticas del aborto. El consejero le aseguró que no. Horas después, Vázquez señaló a este diario que el lunes entrará en vigor el protocolo por el que la Junta instará a los sanitarios a ofrecer a las mujeres las medidas.

Miembros de la dirección nacional muy próximos a Feijóo, que, sin embargo, no llamaron directamente al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sí aprovecharon las declaraciones públicas de Sémper para adherirse a su postura. Ratificaron que “ni se comparten ni se van a llevar a cabo” las medidas antiabortistas expuestas en rueda de prensa por el vicepresidente de la Junta de Vox. Y abundaron en que la posición del PP sobre este delicado y siempre conflictivo asunto del aborto, cuya ley han recurrido hace 12 años al Tribunal Constitucional, es “clara y pública, contundente y rotunda”. En el PP nacional mantienen que, pese a las medidas avanzadas desde Valladolid, en realidad en los protocolos establecidos en su Consejería de Sanidad no hay ningún cambio ni ninguna obligatoriedad que se vaya a exigir a las mujeres para abortar en ese territorio. Pero sí se indicó que, tanto en esa región como en otras, los abortos y las demás actuaciones relacionadas con las medidas antiabortivas o la natalidad “no las llevan a cabo políticos, sino médicos”.

El portavoz nacional de la campaña para el 28-M, Borja Sémper, sí indicó en varias entrevistas el jueves que son “perfectamente compatibles” las políticas de fomento de la natalidad, como las que persigue también en Madrid Isabel Díaz Ayuso. La presidenta popular anunció el viernes la creación de un teléfono de información para embarazadas “a favor de la vida”, con “el respeto a la libertad de la mujer”. Sémper, precisamente en Telemadrid, lanzó un largo discurso en favor de reforzar la libertad de la mujer en estos casos y concluyó que en esos supuestos lo que hay que hacer es “respaldar y dar más cariño y atención” a las mujeres.

El discurso más empático y comprensivo de Sémper sobre el aborto, distanciándose claramente de las medidas restrictivas de Vox, forma parte de la estrategia que se pretende aplicar a partir de ahora cuando surjan diferencias ideológicas y culturales notables con la formación ultra. Un escenario complicado de manejar, que ni Feijóo ni su antecesor, Pablo Casado, han conseguido resolver bien hasta ahora. Todas las preguntas sobre Vox, sus propuestas más radicales y algunas de sus demandas, continúan generando “tensión” en la cúpula popular.

“No acogotarnos”

“Nuestra idea frente a Vox es no tenerles miedo y no acogotarnos cuando Vox diga una barbaridad. Ya sabemos que ellos juegan a tensionar y van a mantener esa presión todo este año electoral, como ha sucedido ahora otra vez en Castilla y León, pero nosotros tenemos que estar a nuestro libro y no dejar que nos abran debates que no están en nuestra agenda”, explican en el entorno directo de Feijóo para esta campaña. En el PP aún aspiran a alcanzar en las próximas elecciones generales alrededor de 140 escaños para gobernar en solitario sin Vox. El líder ultra, Santiago Abascal, tiene otra idea, que le remitió de nuevo el viernes a Feijóo: “Vox también prefiere ganar con mayoría absoluta y no pactar con el PP, pero la realidad seguramente sea otra. La realidad la van a marcar los españoles en las sucesivas citas electorales”.

<https://elpais.com/espana/2023-01-14/el-pp-de-feijoo-busca-entre-tensiones-como-desmarcarse-de-los-excesos-de-vox.html>

FEIJÓO ABONA LAS TEORÍAS DE LA CONSPIRACIÓN Y ASEGURA QUE SÁNCHEZ TIENE “UN PLAN PARA ALTERAR” LA DEMOCRACIA

El líder del PP se apunta a las narrativas que sirvieron de caldo de cultivo a los golpistas en EEUU y Brasil y sugiere que Sánchez está cometiendo “sedición” al “plagiar” el ‘procés’

Tacha al presidente de “subalterno”, “cautivo” y “soberbio” y le acusa de creerse “el alfa y el omega” y querer “convertir en rehén a toda la nación”

Alberto Núñez Feijóo volvió a demostrar este martes que lo que entiende por moderación no es

incompatible con seguir agitando las teorías de la conspiración que en países como Estados Unidos y Brasil han derivado en asaltos de las instituciones. Sin ofrecer ninguna prueba, pero citando “multitud de indicios racionales”, afirmó que “existe un plan premeditado” de Pedro Sánchez “para alterar sustancialmente las bases de la convivencia democrática que se plasma en la Constitución de 1978”.

El plan, explicó en un acto organizado por el diario Abc, una de las más significadas voces de la derecha mediática, persigue que “todo aquello que fue democráticamente derrotado en la Transición se tome una especie de revancha mediante la erosión calculada de buena parte de nuestro andamiaje institucional y la prescripción de una memoria única, hermana de un pensamiento único”. Para llevarlo a cabo, el presidente del Gobierno recurre al “cuestionamiento pertinaz de las instituciones que equilibran los poderes y amortiguan los conflictos sociales e institucionales” y a una revisión de la historia. Que, en opinión de Feijóo, no es otra cosa que la “confección de un pasado a medida que reabre heridas ya curadas”.

No obstante, Sánchez va a intentar ahora ocultar ese plan, advirtió. “No hay que descartar que asistamos en unos meses a un esfuerzo para lograr que los españoles olviden que su Gobierno actúa como una delegación de todas las fuerzas que trabajan para deteriorar el pacto constitucional en nuestro país”. “Se dejará de insistir en la memoria para insistir en la amnesia”.

Sin embargo, “aunque se oculte hasta que hablen las urnas, el guion se mantendrá vigente y llegará hasta sus últimas consecuencias”, añadió sin precisar a qué se refería. En ese guion “cabén decisiones y medidas que cobran verosimilitud a la luz de todo lo que está pasando” porque “no hay límites para este Gobierno; cualquier pesadilla es posible convertirla en realidad”.

“Apéndice del extremismo”

Según el líder del PP, Sánchez “reniega del capítulo más brillante” de la historia de España para “intentar hurgar en sus divisiones fratricidas” porque está en manos de “fuerzas retrógradas o oscuras, nostálgicas de lo malo, tan extremistas como minoritarias y tan radicales como aisladas”. La socialdemocracia española, acusó, se ha convertido en “un apéndice del extremismo” por decisión del secretario general del PSOE, “un líder que supedita la tradición y los principios de su partido a un proyecto en el que él, haciendo gala de una proverbial soberbia, se considera el alfa y el omega”. “En realidad no lo es”, aclaró Feijóo. “Es un mero intérprete de un libreto escrito por la extrema izquierda y el independentismo que ha encontrado en el presidente del gobierno actual el medio idóneo de ir imponiendo sus tesis a la sociedad española”.

El mismo Feijóo al que su equipo trata de presentar como un dirigente centrista y alejado de la crispación, no ahorró calificativos. Sánchez es “un presidente cautivo por propia voluntad que ni tiene poder real sobre buena parte del gobierno ni controla realmente la agenda política y legislativa”. Vive en “libertad condicionada” y “subordinado a sus socios”, convertido en “seguro servidor del radicalismo” y “subalterno del extremismo”.

Esta vez no cuestionó expresamente la legitimidad del Gobierno —son otros dirigentes del PP, como Miguel Tellado, los que se ocupan de trasladar ese mensaje, que también está en la base de lo ocurrido en Washington en 2021 y en Brasilia hace apenas tres días—. Pero sí lo hizo de forma implícita al acusar a Sánchez de querer “convertir en rehén a toda la nación hurtándole a la ciudadanía cualquier capacidad de decisión”. Se refiere, explicó, a que según él “ninguna de las grandes decisiones que erosionan el Estado democrático figuraban” en el “programa electoral” del PSOE ni “en el programa de investidura”.

“Esta ocultación”, subrayó dando aliento a quienes cuestionan la legitimidad del Gobierno, “avala la idea de que estamos ante un intento de reformular las bases de convivencia democrática (...) de forma oblicua, con luz apagada y con taquígrafos ausentes”.

“Plagiar” la “sedición”

Feijóo aprovechó la conferencia, patrocinada por la constructora Ferrovial —cuyo presidente ejecutivo, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, no dudó en mostrar en público el respaldo de su empresa al candidato del PP—, para ampliar su catálogo de reproches al presidente Sánchez añadiendo una nueva y grave acusación: la de “plagiar” la “sedición” cometida por los independentistas catalanes en 2017. “No es hiperbólico afirmar que asistimos a una aplicación

no prevista del artículo 155 de nuestra Constitución” mediante la cual “son los enemigos de la España constitucional quienes marcan los criterios al Gobierno central para que incumpla las obligaciones constitucionales”.

“Podemos afirmar”, subrayó, “que estamos ante el primer gobierno intervenido de la historia democrática de España”. ¿En qué se basa para sostener semejante afirmación? En el “desprecio de los organismos de control”, el “menosprecio al Parlamento”, los “ataques furibundos al poder judicial”, en que “se margina a la oposición” y en que “se estigmatiza cualquier discrepancia señalando a periodistas a medios de comunicación y a empresas”. Son “comportamientos”, dijo, “en los que fueron pioneros los sediciosos” y que “están siendo aplicados por el Gobierno como si de un alumno aventajado se tratase”.

En una hora de intervención, Feijóo no encontró ni un sólo asunto en el que el Gobierno esté actuando bien. Porque es un Ejecutivo que genera, inventa, agrava o esconde los problemas, pero es incapaz de hacerles frente. “¿Qué problema ha resuelto el Gobierno durante estos tres años largos?”, se preguntó antes de responderse a sí mismo: “En nuestra opinión, ninguno”.

Si para la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, las últimas elecciones en su comunidad se redujeron a una elección entre “socialismo y libertad”, para Feijóo las de este año son también un dilema simple: “este Gobierno o España”. Los electores deberán elegir entre “la agitación, el sobresalto y las rupturas” que representan Sánchez y sus aliados y “el sosiego, la recuperación de la normalidad, el establecimiento de puentes” que según él es el PP. “España debe cambiar de presidente si quiere avanzar. De ahí que el dilema actual de la política española vaya más allá de las siglas o del clásico dualismo entre izquierda y derecha: estamos en una encrucijada”.

https://www.infolibre.es/politica/fejoo-abona-teorias-conspiracion-asegura-sanchez-plan-alterar-democracia_1_1402960.html

EL FICHAJE DE ALBIOL PARA EL COMITÉ DE CAMPAÑA DEL PP ROMPE LA IMAGEN DE MODERACIÓN QUE QUIERE VENDER FEIJÓO

El exalcalde de Badalona es el único candidato catalán que puede firmar una victoria en las municipales, pero arrastra una mochila de mensajes racistas y relaciones con dirigentes ultras

Alberto Núñez Feijóo ha repescado al exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, para el comité de campaña del PP de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Un fichaje que se explica porque Albiol es el único candidato catalán del partido que puede firmar una victoria en Catalunya el próximo 28 de mayo, pero que a la vez rompe la imagen de moderación que quiere vender Feijóo, debido al polémico perfil del dirigente. Tras 12 años en primera línea política y después de haber quedado relegado a su municipio, Albiol arrastra una pesada mochila por los mensajes racistas de sus inicios, sus cuestionados métodos como alcalde o las relaciones económicas de su ayuntamiento con dirigentes de Vox.

La dirección del PP se encuentra en plena temporada de fichajes y adaptando el partido a los nuevos tiempos de la era de Feijóo. En la última semana, el nuevo presidente popular ha anunciado las incorporaciones de Borja Sémper, considerado un político de la derecha moderada, y también a Daniel Sirera como candidato de Barcelona, un hombre de larga fidelidad al PP catalán y afín a la actual dirección autonómica. Otros desembarcos recientes han sido el del exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, como coordinador del programa marco en las municipales, un anuncio que llegó tras la confirmación del coordinador general del PP, Elías Bendodo, como jefe de esa misma campaña.

La mayoría de esos perfiles transmitían el mensaje de que el PP volvía a etapas pasadas y miraba hacia la moderación. Pero Xavier García Albiol, conocido por el polémico lema de “limpiando Badalona” que utilizó en 2015, con el doble sentido del saneamiento de las vías públicas y de la mano dura contra los migrantes, hunde cualquier aspiración de convertir el equipo de municipales en una señal de un giro hacia el centro. El badalonés se encargará de la coordinación de candidatos en el comité electoral, junto a Macarena Montesinos.

Aquel famoso cartel de Albiol, que se hizo viral en las elecciones en las que Guanyem Badalona le arrebató la alcaldía, no ha sido el único episodio de corte racista. En la campaña anterior, la de 2012, el candidato del PP adoptó como nunca antes los mensajes de miedo al extranjero, llegó a tildar a los gitanos rumanos de “plaga que solo ha venido a delinquir” e hizo suyo el lema de Le Pen de “primero los de casa” cuando defendió que “quien lleva años pagando impuestos

acceda a las ayudas por delante de quien acaba de llegar”.

De su etapa como alcalde también han sido polémicas las relaciones económicas entre el ayuntamiento de Badalona y personas del entorno de la extrema derecha, como Jorge Buxadé, quien años después se convertiría en líder de Vox en el Parlamento Europeo. En concreto, el despacho de abogados de Buxadé recibió cobros mensuales de la fundación Badalona Capital Europea del Bàsquet durante los cuatro años que Albiol presidió la entidad como alcalde. El bufete en total facturó 109.696 euros por trabajos en concepto de asesoría técnica y minutas, para después fichar directamente a Buxadé como secretario de la entidad.

Albiol ha sido desalojado de la alcaldía de Badalona dos veces. La primera en 2015, al perder la mayoría en el pleno. Y la segunda en noviembre de 2021, tras aparecer en los Papeles de Panamá vinculado a una sociedad en el paraíso fiscal de Belice entre los años 2005 y 2015, es decir, ya como alcalde.

En los últimos tiempos, el candidato en Badalona y ahora miembro del comité electoral del PP ha tratado de pasar página de aquellas polémicas y ha intentado apelar a un votante que no necesariamente tiene que verse reflejado por sus mensajes. Albiol se ve con opciones de recuperar para su partido la cuarta ciudad catalana gracias a la fragmentación de la izquierda y la inestabilidad política que ha hecho que Badalona haya tenido cuatro alcaldes en seis años.

Con ese viento de cola, al aspirante a alcalde ya no le hace falta repetir mensajes como “limpiando Badalona”. Su último cartel en la ciudad llamó la atención precisamente por lo contrario, al copiar la estética de una conocida campaña independentista y lanzar un mensaje mucho más cordial que decía: “No quiero cambiar tu ideología, quiero cambiar Badalona”.

https://www.eldiario.es/catalunya/fichaje-albiol-comite-campana-pp-rompe-imagen-moderacion-quiere-vender-feijoo_1_9855597.html

UN DIPUTADO DE AYUSO PARTICIPA EN OTRA REUNIÓN DE POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES PARA MANIFESTARSE CONTRA EL GOBIERNO

Daniel Portero ha explicado a los sindicatos y asociaciones el calendario de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y la estrategia para retrasar su aprobación a través de la presentación de enmiendas en el Senado

Los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil han vuelto a reunirse para coordinar acciones de protesta contra el Gobierno en el presente año electoral. En esta ocasión participó en la reunión el diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Daniel Portero, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras del encuentro. La convocatoria de la reunión respondía a la “unidad de acción” en las movilizaciones contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que tramita el Congreso. A este respecto se ha referido Portero en su intervención, quien ha advertido a los presentes que la ponencia finaliza esta semana y que en febrero se discutirá en el pleno del Congreso.

Este hecho ha sido uno de los puntos principales del encuentro, ya que el sindicato policial mayoritario, Jupol, y su espejo en la Guardia Civil, Jucil –ambas proceden de Jusapol–, proponen una movilización en la calle en las próximas semanas a imagen y semejanza de la que organizaron con apoyo de PP, Vox y Ciudadanos en noviembre de 2021. Aquella convocatoria, que incluía tergiversaciones de las enmiendas que PSOE y Unidas Podemos habían acordado a la reforma propuesta por el PNV, resultó un éxito de asistencia. En esta ocasión, Jusapol no ha logrado el respaldo necesario para una convocatoria inmediata de manifestación.

El diputado autonómico del PP Daniel Portero ha lamentado ante los uniformados que el Gobierno y “sus socios” no permitan a los agentes comparecer en la comisión que aborda la reforma legal, pese a que afecta a su labor diaria, según dijo ante ellos.

Las fuentes consultadas señalan que Portero reveló la estrategia de su partido, para la que reclamó apoyo a policías y guardias civiles: que las distintas formaciones de la oposición presenten enmiendas en el trámite del Senado de tal forma que el texto vuelva al Congreso y se produzca un retraso que alcance a las próximas elecciones generales, previstas para diciembre, y un eventual cambio de Gobierno frene la reforma en marcha.

elDiario.es ha solicitado la versión de Portero, quien ha asegurado que su participación en la

reunión responde a su presidencia de la asociación Dignidad y Justicia y no a su puesto como diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Portero ha declarado que su asociación, dedicada principalmente a presentar querellas por supuestos delitos de terrorismo, ya formó parte de la plataforma que apoyó la protesta de noviembre de 2021.

Según Daniel Portero, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana provocará que no se pueda castigar el “terrorismo de baja intensidad” como pintadas a favor de ETA –la organización terrorista desaparecida hace una década– o los que ha denominado “actos de kale borroka cometidos por personas sin antecedentes”. Portero ha sido el único representante ajeno a asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas de Seguridad que ha participado en el encuentro, confirman varias fuentes presentes en el mismo.

Convocatoria tras la reunión en Génova

La anterior reunión de policías y guardias civiles para acordar protestas en la calle se celebró el 14 de diciembre en una sala de la sede nacional del Partido Popular, después de que sindicatos y asociaciones mantuvieran un encuentro con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La publicación por parte de elDiario.es, una semana más tarde, de la reunión celebrada en Génova provocó que algunas asociaciones se replantearan la convocatoria inmediata de una manifestación. Pero Portero asegura en conversación con este diario que ni siquiera conocía que se hubiera producido esa primera reunión.

En el encuentro de este martes se ha producido un enfrentamiento verbal entre el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, y el representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, en el que ha tratado de mediar el diputado autonómico del PP. El representante de AUGC expresó su rechazo a que la convocatoria sea monopolizada por los partidos políticos, como a su juicio pasó con la anterior manifestación. AUGC cree que la manifestación es “el último recurso”, según expresó su representante.

En esta ocasión, la reunión se ha celebrado en un salón de la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil, una organización vinculada al instituto armado, que preside un general según marcan sus estatutos, y que ofrece sus instalaciones a asociados y organizaciones del Cuerpo de acuerdo a unas tarifas establecidas. Un portavoz de Jucil ha confirmado que fue esta asociación quien reservó la instalación y quien abonará la factura.

https://www.eldiario.es/politica/diputado-ayuso-participa-reunion-policias-guardias-civiles-manifestarse-gobierno_1_9855603.html

EL PP CUESTIONA LA LEGITIMIDAD DEL GOBIERNO DOS DÍAS DESPUÉS DEL INTENTO DE GOLPE EN BRASIL

Feijóo señala, días después del asalto en Brasil, que Sánchez quiere subvertir el orden constitucional, califica de “intervenido” a su Gabinete y denuncia un “asalto” a las instituciones, entre las que incluye organismos y empresas clave para el recuento electoral, mientras Abascal habla de “golpe de Estado”

Pedro Sánchez dirige un Gobierno cautivo de sus socios, “intervenido”. En España no se respeta “la democracia parlamentaria”. Los partidos de la coalición que gobierna han iniciado un “asalto institucional” que busca “perpetuarse” al frente del país. Entre estas instituciones se encuentra el INE, responsable “del censo electoral”. O la empresa tecnológica Indra, habitual responsable de ordenar los resultados que remiten desde las mesas electorales. Porque Sánchez no quiere abandonar la Moncloa y hará lo que sea necesario para mantenerse al frente del Ejecutivo y así, a partir de la siguiente legislatura, iniciar un proceso de demolición del orden constitucional.

Esta es, en resumen, la tesis que viene exponiendo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus portavoces desde que relevara a Pablo Casado al frente del partido, en abril del año pasado. Una idea que el dirigente gallego ha desarrollado en diferentes etapas y que creció en intensidad a la vuelta del último verano, cuando las encuestas comenzaron a reflejar un agotamiento del efecto de su llegada a la planta noble de la sede nacional del partido, en la calle Génova de Madrid.

Ya en junio del año pasado, el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, aseguró en una comparecencia ante los medios que “el CIS hace las encuestas electorales, el

INE el censo e Indra cuenta los votos". Pons, que pasa por ser uno de los dirigentes autocalificados como "moderados" de la cúpula de Feijóo, dijo una verdad a medias, puesto que Indra no recuenta los votos, sino que recopila toda la información que llega de cada mesa electoral y los centraliza para su posterior comunicación.

A eso se agarró Pons cuando fue cuestionado por la dificultad de un fraude electoral como el que estaban insinuando: "Es verdad que los votos van por acta, pero Indra da los resultados la primera noche". "Confiamos en los profesionales de estas instituciones, pero no en la voluntad de Sánchez", añadió.

Feijóo no ha ido tan lejos, eso se lo deja a sus subalternos. Por ejemplo, su coordinador general, Elías Bendodo, quien ha asegurado hace escasas semanas que el presidente del Gobierno quiere "utilizar el poder para cargarse la democracia".

Pero Feijóo sí ha insistido de forma habitual en sus acusaciones al Gobierno de coalición de querer acabar con "la separación de poderes", de querer controlar "al Poder Judicial", pese a que es el PP quien se niega a su renovación desde hace más de cuatro años y quien ha intentado, sin éxito, impedir el relevo de varios magistrados del Tribunal Constitucional, que ahora contará con una mayoría progresista durante nueve años.

El líder del PP ha acusado a Sánchez de "caudillista" y de ser "el presidente más autoritario de la democracia". Un paso más allá fue este pasado mes de diciembre ante la Junta Directiva Nacional de su organización, cuando afirmó que "no es legítimo" lo que hace el presidente del Gobierno y dijo que llegaría "hasta donde haga falta" para detenerlo. Un nuevo giro en la estrategia definida desde el congreso extraordinario que lo encumbró tras el golpe de mano contra Casado. Feijóo quiso hacer del cónclave de abril del año pasado en Sevilla un parteaguas con la anterior dirección. Durante meses se había esforzado en no repetir un significativo que su predecesor sí usó de forma habitual, el de "gobierno ilegítimo". No lo hizo, pero lo dejó caer.

El 19 de diciembre, ante la plana mayor del PP, concluyó: "O este Gobierno o España". Una idea copiada directamente de la factoría Ayuso. Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido mucho más beligerante en sus expresiones contra Sánchez. Ella sí ha tachado al Ejecutivo de "ilegítimo". De "tirano". De "autoritario".

La dirigente madrileña, quien ya ha deslizado en público que las de mayo serán sus últimas elecciones como candidata autonómica, rivaliza así con la ultraderecha de Vox. Los de Santiago Abascal no limitan nunca su ofensiva dialéctica contra Sánchez y el Gobierno con Unidas Podemos. Y no dudan en utilizar los calificativos más gruesos contra el presidente: desde llevarle a los tribunales por "conspirar contra la democracia" a hablar abiertamente de "golpe de Estado" por la reforma del Código Penal.

Pero esta semana se ha producido un salto cualitativo, coincidiendo con el intento de golpe de Estado en Brasil contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cientos de seguidores del ultra Jair Bolsonaro, quien no ha reconocido los resultados electorales que le han desbancado de la Presidencia del país, asaltaron las principales instituciones del Estado.

Este martes, dos días después del asalto, que el PP ha intentado vincular insistentemente con hechos ocurridos en España, Feijóo aseguró en un discurso en un foro organizado por el diario Abc. "Hay multitud de indicios racionales que acreditan que existe un plan premeditado para alterar sustancialmente las bases de la convivencia democrática", dijo el presidente del principal partido de la oposición. El gallego siguió: "la extrema izquierda y el independentismo han encontrado en él [Pedro Sánchez] el medio idóneo para ir imponiendo sus tesis a la sociedad española". El líder del partido que, según sus datos, más militantes tiene en España no se quedó ahí y tachó al presidente del Gobierno de "líder soberbio" y, a la vez, de ser un "subordinado útil" que ha convertido "en rehén a toda la nación".

Para el presidente del PP, la mayoría parlamentaria (que suma para leyes como los Presupuestos y otras no menos de 185 votos) no tiene legitimidad porque, en su opinión, son "minorías". Y esas "minorías" son las que "hacen las leyes", mientras "las mayorías" que representa su partido "intentan que se le apruebe alguna enmienda". "Y esto es lo contrario a la democracia parlamentaria", añadió. El PP tiene 88 diputados, por 120 del PSOE.

Feijóo apuntaló: "No hay límites para este Gobierno, cualquier pesadilla es posible". Y zanjó:

“España debe cambiar de presidente”. Algo que no se producirá si se cumple la teoría de la conspiración esgrimida primero por Vox y luego por el PP de que Sánchez pretende un pucherazo electoral. Porque en el PP no contemplan la opción de no ganar en las elecciones. Salvo que el Gobierno utilice el INE e Indra para “perpetuarse” en el poder.

https://www.eldiario.es/politica/pp-cuestiona-legitimidad-gobierno-dias-despues-golpe-brasil_1_9855376.html

FEIJÓO COMPARA EL INTENTO DE GOLPE DE ESTADO EN BRASIL CON EL 'RODEA EL CONGRESO' DE 2016

El líder del PP relaciona el asalto violento a las principales instituciones estatales protagonizado por seguidores de Bolsonaro rabiosos por el triunfo de Lula con la manifestación contra la investidura de Rajoy gracias a la abstención de parte del PSOE

8 de enero de 2023. Centenares de manifestantes ultras que protestan contra el triunfo electoral de Lula da Silva rompen el leve cordón policial que protege los edificios que albergan las principales instituciones de Brasil: el Congreso, la sede del Gobierno y el Tribunal Supremo. El presidente del país sudamericano toma el control de la seguridad del Distrito Federal, donde se ubica la capital, y desaloja a los golpistas, que pretende derrocar al jefe del Estado para que siga en el cargo su líder, el derechista Jair Bolsonaro. 30 de octubre de 2016, decenas de miles de personas se manifiestan de forma mayoritariamente pacífica en los alrededores del Congreso, en Madrid, contra la investidura de Mariano Rajoy. El debate y la votación se celebran y Rajoy mantiene el cargo gracias a la abstención de buena parte del PSOE. El amplio despliegue de seguridad prácticamente no tiene que intervenir.

Dos hechos que para el PP son comparables. Lo hizo el lunes el flamante portavoz, el “moderado” Borja Sémper. Y lo ha reiterado este martes el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien también ha secundado a su secretaria general, Cuca Gamarra, quien el mismo domingo relacionó el intento de golpe de Estado en Brasil con el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Catalunya.

“Hay que tipificar el referéndum de delito ilegal para evitar males mayores como los que han ocurrido en Brasil o en el Capitolio [en 2021]”, ha dicho esta mañana Feijóo durante una intervención en un acto organizado por el diario Abc. La tipificación del referéndum como delito, que salió del Código Penal durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, es una de las promesas del dirigente gallego si llega a la Moncloa, y es una referencia directa al 1-O y al procés catalán.

Pero Feijóo no se ha quedado ahí y ha añadido: “O como algunas manifestaciones que hemos visto en España que tiene la gente en la memoria, como es una manifestación en el Congreso mientras un presidente que ha ganado las elecciones toma posesión”.

Las palabras del líder del PP solo pueden referirse a la manifestación de 2016 durante el debate de investidura (no toma de posesión). Pero no es la primera vez que el partido lo hace. En 2021 también señalaron las supuestas similitudes entre el Rodea el Congreso de 2016 y el asalto al Capitolio de EE UU tras el triunfo de Joe Biden frente a Donald Trump en las elecciones presidenciales.

Una protesta que no supuso la interrupción del debate ni de la votación del Poder Legislativo, mucho menos la ruptura de las barreras policiales ni la entrada en el Congreso. Algo que sí se produjo en otra manifestación que en el PP no mencionan nunca: la de policías de Jusapol en marzo de 2020.

https://www.eldiario.es/politica/fejoo-compara-golpe-brasil-rodea-congreso_1_9854419.html

EL PP USA EL ASALTO VIOLENTO A LAS INSTITUCIONES BRASILEÑAS PARA ATACAR A PEDRO SÁNCHEZ

Gamarra utiliza su primer mensaje público para arremeter contra el presidente

El PP, principal partido de la oposición, apenas ha tardado unas horas en reaccionar al ataque violento a las instituciones sucedido este domingo en Brasil, donde miles de seguidores del

ultraderechista Jair Bolsonaro han asaltado las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo, exigiendo una intervención militar para echar a Luiz Inácio Lula da Silva del poder, que tomó posesión hace una semana. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, se ha encargado de lanzar uno de los primeros mensajes a través de las redes sociales, que no ha aprovechado para condenar los actos, sino para cargar contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En un mensaje de Twitter, difundido también por la cuenta oficial de la formación, Gamarra se ha dirigido así al jefe del Ejecutivo: “Contigo, en España esto ahora es un simple desorden público...”, en referencia a las recientes reformas del Código Penal impulsadas por el Gobierno. Sin embargo, esas modificaciones no implican un cambio en el delito de rebelión, que sigue vigente en España y que castiga a quienes “se alzaren violentamente y públicamente para cualquiera de los fines siguientes”, como “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “sustituir por otro el Gobierno de la nación”. Para estas acciones se prevén penas de hasta 30 años de prisión.

La popular respondía con ese tuit a un mensaje previo de Sánchez, que decía: “Todo mi apoyo al presidente Lula y a las instituciones libre y democráticamente elegidas por el pueblo brasileño. Condenamos rotundamente el asalto al Congreso de Brasil y hacemos un llamamiento al inmediato retorno a la normalidad democrática”. La presidenta del Parlamento español, Meritxell Batet (PSOE), se había pronunciado también en la misma línea que el presidente: “Sigo con preocupación las noticias del asalto al Congreso, al Palacio presidencial y a la sede del Poder Judicial de Brasil. Quiero trasladar mi apoyo y solidaridad a Lula y a las autoridades brasileñas ante este ataque intolerable a las instituciones y a la democracia”.

Casi una hora después del primer mensaje de Gamarra se ha pronunciado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a través de otro mensaje de Twitter, sin ninguna referencia a Lula: “Manifestamos nuestro apoyo al pueblo brasileño y hacemos un llamamiento al inmediato restablecimiento del orden constitucional. No se puede ceder ante los populismos y la radicalidad, que intentan socavar el respeto a las instituciones, la democracia y las libertades públicas”. Posteriormente, Gamarra ha puesto otro tuit donde afirma: “El golpismo no tiene cabida en ningún lugar. Recordemos lo frágiles que también son las democracias y la obligación de fortalecerlas y protegerlas”.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha considerado “lamentable” este lunes que Gamarra “no tuviera nada que decir en apoyo a la democracia en sus primeras manifestaciones”, “ni de rechazo a la ultraderecha y a los movimientos ultraderechistas”. El responsable de las relaciones diplomáticas del país se ha expresado en términos muy similares en dos intervenciones en Onda Cero y la Cadena Ser. Las manifestaciones de la número dos del PP, a juicio de Albares, demuestran que el principal partido de la oposición “no tiene nada que decir en política exterior” y ha hecho hincapié en que esta situación se observa en un país como España que está “a algo más de cinco meses” de ostentar la Presidencia del Consejo de la Unión Europea.

Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, también usó este domingo las redes sociales para manifestar su postura: “La democracia nunca está garantizada. Por eso es tan importante protegerla de sus enemigos con una legislación a la altura, que castigue duramente a sediciosos golpistas. Nuestra rotunda condena al asalto a las instituciones en Brasil”. Pasadas las 22.40 del domingo, la fuerza ultraderechista Vox, aliada de Bolsonaro y socia del PP en el Gobierno de Castilla y León, no había emitido ningún mensaje en su cuenta de Twitter sobre el asalto a las instituciones brasileñas. Tampoco lo había hecho su líder, Santiago Abascal.

<https://elpais.com/espana/2023-01-08/el-pp-usa-el-asalto-violento-a-las-instituciones-brasilenas-para-atacar-a-pedro-sanchez.html?rel=lom>

FEIJÓO MANTIENE EL BLOQUEO DEL PODER JUDICIAL AFERRADO A SU PROPUESTA DE ELECCIÓN DE VOCALES

La asociación judicial progresista alerta de que la actitud del PP amenaza con postergar cualquier posibilidad de renovación hasta, al menos, 2024

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a poner sobre la mesa este lunes su propuesta de reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presentada la pasada semana y con la que pretende que los propios jueces y

magistrados elijan directamente a 12 de los 20 vocales de este órgano —actualmente, las Cortes designan a todos ellos—. El partido intenta sacudirse así las críticas por el bloqueo del CGPJ, cuya renovación se encuentra pendiente desde hace más de cuatro años con diferentes excusas de los populares. Mientras, la izquierda intensifica sus reproches. Y la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia alerta de que la actitud del PP amenaza con postergar cualquier posibilidad de renovación hasta al menos 2024, una vez constituidas las cámaras tras las elecciones previstas para finales de este año.

A lo largo de este lunes se han sucedido las arremetidas contra Feijóo, que se aferra a su propuesta tras romper de nuevo en octubre las negociaciones con los socialistas. Dos miembros del Ejecutivo se han pronunciado en el acto de toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido al líder del PP “un ejercicio de autoridad en la derecha” para proceder a la renovación. En esa misma línea, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, ha añadido: “La deslegitimación de la justicia se produce cuando un partido como el PP es rebelde y no respeta los mandatos constitucionales”.

No han sido las únicas críticas. El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, se expresó con mayor dureza y ha calificado el bloqueo del PP como un “golpe judicial” y un “secuestro” que se prolonga desde hace cuatro años. “Lo que hace Jair Bolsonaro con su turba de fanáticos es lo que hace Feijóo con los togados”, aseguró el representante del partido minoritario de la coalición de Gobierno, en referencia al asalto a las instituciones brasileñas perpetrado este domingo por los seguidores del expresidente sudamericano. IU también ha definido la actitud de los populares como una “estrategia ultra”, que responde a la visión “patrimonialista” que tienen de las instituciones, que les lleva a “torpedearlas” cuando no consiguen ganar los comicios.

Una carrera de mayoría conservadora

El PP presentó la pasada semana una reforma para “despolitizar” la justicia. Esta iniciativa, que ya llevó en el programa electoral de 2011 y que no aplicó pese a que ganó los comicios con mayoría absoluta, implica volver al sistema previsto en la ley de 1980, que establecía que los 12 vocales de extracción judicial —los otros ocho son juristas de reconocido prestigio— debían ser elegidos directamente por jueces y magistrados. La propuesta registrada ahora en el Congreso contempla que cada uno de estos pueda votar a seis de los candidatos que se presenten al CGPJ, y dejaría en manos de la carrera judicial, de mayoría conservadora, la designación de la mayoría de componentes del Consejo.

Los datos del CGPJ revelan la siguiente composición. De los 5.408 jueces y magistrados que ejercen en España, más del 47% se encuentran afiliados a una asociación de corte conservador o moderado (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente). Solo un 8% pertenecen a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Por su parte, el 55,5% no se encuentra asociado.

Esta situación provocó, precisamente, que el Gobierno de Felipe González (PSOE) modificase la ley en 1985, ya que la candidatura de la Asociación Profesional de la Magistratura copó al 100% los 12 puestos de vocales de extracción judicial del primer Consejo. La reforma de los socialistas dejó entonces en manos del Congreso y el Senado el nombramiento de los 20 vocales, un sistema que fue avalado por el Tribunal Constitucional en 1986. Al respaldar ese cambio, el tribunal de garantías ya dejó claro que el CGPJ no es un “órgano de representación de la carrera”, como expone el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas Murillo en el libro Comentario mínimo de la Constitución, aunque también advirtió del riesgo de que la lucha partidista derivase en abusos —en los últimos lustros, PP y PSOE se han repartido los vocales por cuotas, en función de sus resultados electorales—.

Este reparto de cromos ha generado un intenso debate en el mundo jurídico en los últimos años, y todas las asociaciones judiciales están de acuerdo en estudiar la reforma del sistema. Eso sí, Juezas y Jueces para la Democracia insiste en que ahora urge proceder a la renovación del CGPJ, pues es un mandato constitucional que se lleva incumpliendo desde hace cuatro años. “No se puede tirar la toalla. No se puede dar por supuesto que no se va a renovar hasta, al menos, marzo de 2024, una vez se constituyan las Cortes tras las elecciones”, explica Ascensión Martín, portavoz de la asociación progresista.

<https://elpais.com/espana/2023-01-10/feijoo-mantiene-el-bloqueo-del-poder-judicial-aferrado-a-su-propuesta-de-eleccion-de-vocales.html>

FEIJÓO METE EN UN CAJÓN LA DESPOLITIZACIÓN DEL TC PARA RECLAMAR EL 'DERECHO' DEL PP A DESIGNAR UN MAGISTRADO

La plaza vacante que falta por cubrir y que corresponde decidir al Senado es “un miembro del Tribunal Constitucional que le corresponde por ley al partido de la oposición”, proclamó el líder del PP

Feijóo insiste en el chantaje al Gobierno: no renovará el CGPJ a menos que Congreso y Senado acepten la reforma del modelo de elección que en estos momentos sólo defienden PP, Vox y Ciudadanos

Despolitización sí, pero sólo cuando afecta al Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el mismo que tacha de “asalto” al Tribunal Constitucional (TC) la decisión del Ejecutivo de nombrar a dos magistrados afines, reclama el derecho del PP a elegir el nombre del miembro número doce del organismo arbitral que, según él, “le corresponde por ley”.

En estos momentos permanece vacante en el TC la plaza del magistrado conservador elegido en su día por el Senado, Alfredo Montoya, que renunció en julio por motivos de salud. El suyo es uno de los cuatro puestos del Tribunal que elige la Cámara Alta y, como en su día fue propuesto por el PP, Feijóo reclama esa plaza como propia al mismo tiempo que proclama la necesidad de despolitizar la institución. Es “un miembro del Tribunal Constitucional que le corresponde por ley al partido de la oposición”, afirmó este jueves en una entrevista concedida a la agencia Servimedia.

La demanda de Feijóo revela el interés del PP por garantizar la continuidad de los conservadores en el TC porque, a diferencia de lo que hacía hasta ahora, no invoca la necesidad de llegar a un acuerdo entre partidos basado en criterios técnicos y profesionales sino que exige el derecho del PP a decidir quién sustituirá a Montoya. Mientras no se lleve a cabo ese relevo, el TC tendrá a partir del lunes una mayoría progresista de siete a cuatro (el pleno de este organismo está compuesto por doce magistrados) que la elección del sustituto de Montoya, que tiene que llevarse a cabo en el Senado, paliará en parte.

En la misma entrevista, Feijóo dio a entender que el PSOE quiere “negarle” ese puesto y se mostró dispuesto a quejarse ante la Comisión Europea. La paradoja es que el líder del PP también quiere denunciar en Bruselas que los dos magistrados elegidos por el Gobierno, en aplicación de la ley que regula el TC, son ex altos cargos del Ejecutivo: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, que también es juez en ejercicio, y la exdirectora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez, catedrática de Derecho Constitucional.

“Europa tiene que conocer que en este momento más del 10% del Tribunal Constitucional son ex altos cargos del Gobierno”, declaró. Es algo que el comisario de Justicia europeo “tiene que conocer de forma oficial” por boca del PP. “Porque no son hechos que ocurran con normalidad en los países de la Unión Europea”, añadió.

Pero no es verdad. El propio comisario de Justicia, Didier Reynolds, ya aclaró el pasado 2 de diciembre que es algo habitual en varios países. Ocurre en Bélgica, en Francia y Alemania. Y sucedía hasta hace bien poco en Italia.

Doble rasero

La exigencia de Feijóo de elegir al magistrado número doce, el que está pendiente en el Senado, con el argumento de que la plaza la dejó vacante un conservador seleccionado en su día por el PP pone al descubierto el doble rasero del líder de la oposición, que lleva meses acusando al Gobierno de querer hacerse con el control no sólo del TC sino también del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovación él mismo mantiene bloqueada desde hace cuatro años para garantizarse una anómala mayoría conservadora.

El líder del PP insiste en negarse a cumplir la legislación vigente y mantiene el chantaje al Estado que inició Pablo Casado en 2018. Si no se cambia antes la ley para que 12 de los 20 vocales del CGPJ sean elegidos directamente por los jueces, poniendo fin al modelo de elección indirecta que lleva aplicándose 40 años en España —los jueces proponen una lista de 50 nombres y el Congreso y el Senado seleccionan a una docena de ellos—, el PP mantendrá el bloqueo e impedirá que la institución se renueve.

Feijóo llegó a decir hace un mes que el PP bloquea la renovación para “proteger el poder judicial” del Gobierno, cuando es la mayoría que apoya al Ejecutivo la que, según la ley, tiene derecho a elegir a la mayoría de los vocales del Consejo.

Así se ha hecho siempre, con gobiernos del PP y del PSOE, con Felipe González, con José María Aznar, con José Luis Rodríguez Zapatero y con Mariano Rajoy. Gracias al modelo de elección que Feijóo se niega a cumplir, la derecha judicial ha controlado el Consejo General del Poder Judicial durante los últimos nueve años, cuatro de ellos en funciones. Del mismo modo, los conservadores han dominado durante nueve años el Tribunal Constitucional con una mayoría de siete magistrados frente a cinco progresistas, una proporción a la que acaba de darle la vuelta el nombramiento de cuatro de los puestos caducados.

https://www.infolibre.es/politica/fejoo-mete-cajon-despolitizacion-tc-reclamar-derecho-pp-designar-magistrado_1_1400235.html

EL VOTANTE "HOOLIGAN" Y EL BLOQUEO DEL CGPJ: EL ODIO A SÁNCHEZ EN LAS BASES DEL PP MARCA EL PASO A FEIJÓO

El CIS muestra tal grado de inquina del electorado del PP hacia el presidente, inducida por una legislatura de negación de su legitimidad, que el líder popular tendría escaso margen para el pacto incluso si quisiera

Carmen María López-Rico, que ha investigado la polarización, alerta de un "círculo vicioso": los dirigentes que instigan la aversión al adversario acaban maniatados por el rechazo al pacto entre sus propios electores

Alberto Núñez Feijóo se mantiene firme incluso después del desbloqueo de la elección de magistrados al Tribunal Constitucional: el PP no pacta la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No mientras el Gobierno esté en la "esclavitud moral" a Bildu y ERC, dice el dirigente Esteban González Pons, reiterando la última de una larga ristra de excusas, ahora complementada con la exigencia de aceptar que "los jueces elijan a los jueces". Sigue vigente la afirmación de Feijóo, dispuesto a "proteger" el CGPJ de Pedro Sánchez. La actitud de Feijóo, como antes la de Pablo Casado, impide cumplir lo que marca la Constitución: la renovación cada cinco años del órgano del gobierno de los jueces, con mandato caducado desde 2018 y cuya composición responde a una mayoría que ya no coincide con la expresada en las urnas.

Al analizar la actitud de Feijóo suelen citarse diversos factores: la presión de un sector de la derecha liderado por Isabel Díaz Ayuso o su propio deseo de mantener un CGPJ afín. Sin embargo, Feijóo tiene un incentivo más, a menudo inadvertido: complacer a sus votantes. O no cabrearlos. No sólo a los militantes del PP, sino a su propia base electoral. Con el bloqueo del CGPJ asistimos en vivo y en directo a una consecuencia concreta de la tan nombrada "polarización", en este caso del electorado derechista, que tras toda una legislatura escuchando que hay un presidente ilegítimo da muestras de unos niveles tales de enconamiento que permiten hablar de odio y que por supuesto obstruyen la vía del pacto.

La pandemia ensanchó la brecha

Al hablar de "polarización", no nos referimos a la bronca entre partidos. Tampoco al descontento en el electorado. Hablamos de división ideológica profunda en el seno de la sociedad. No es un fenómeno nuevo en España. La radicalización se ha visto favorecida por años de planteamientos plebiscitarios, tipo "comunismo o libertad" o "Sánchez o España", por los algoritmos de las redes sociales, que privilegian el contenido polarizador, y por la presión de los militantes, en posiciones más beligerantes que el conjunto de la sociedad y con más poder a raíz de la generalización de las primarias. En el artículo *How ideology, economics and institutions shape affective polarization in democratic polities*, Noam Gidron, James Adams y Will Horne ya detectaron antes de la pandemia que España era el país más polarizado de Europa.

El covid-19 –con la incertidumbre y el aislamiento que provocó– ha aumentado la polarización y al mismo tiempo ha ofrecido un campo de pruebas para medirla. La producción académica al respecto ha sido abundante en EEUU. Los datos de Google permitieron observar que el cumplimiento de las restricciones fue mayor en los condados de mayoría demócrata que en los de mayoría republicana, según este artículo. Hay más, todos en esa línea: el discurso contra las restricciones del Partido Republicano caló entre sus bases, que interiorizaron la idea de que se trataba de imposiciones autoritarias. Lo mismo ocurrió con las vacunas.

La pandemia permitió observar esta tendencia en España. Pronto las posiciones de la ciudadanía empezaron a venir más determinadas por el alineamiento con su partido que por su propio análisis. En abril de 2020, cuando las críticas al Ejecutivo se centraban en su reacción tardía y no en la supuesta restricción de derechos, los votantes de Vox eran los más partidarios de prohibir la salida a la calle (63,7%). En mayo, eran los menos partidarios (39,1%). ¿Cómo se explica? Vox viró su discurso hacia la denuncia del "totalitarismo" de Sánchez. En septiembre de 2020 las brechas sobre asuntos teóricamente neutros se habían multiplicado.

Manifestación negacionista en Madrid en 2021.

La vacuna se convirtió en una opción más de izquierdas que de derechas. Los votantes menos dispuestos a inyectársela eran los de Vox, un 36%, lejos de Unidas Podemos (53,5%) y los del PSOE (51,9%). Los del PP estaban en la parte baja de la horquilla (46,6%)

Brechas ante los impuestos y el Belén navideño

Han pasado más de dos años de continuo enfrentamiento entre los dos principales partidos de la oposición –PP y Vox– y el Gobierno, cuya legitimidad ha sido puesta en cuestión. Hoy contamos con una fotografía de la polarización social bastante precisa. Es profunda. Incluso muy profunda. Puede observarse en el último barómetro del CIS, de diciembre. Diversas cuestiones muestran una fuerte división ideológica en cuestiones como el cambio climático, que preocupa "mucho o bastante" al 94,7% de los votantes de UP y al 91,4% de los del PSOE, lejos del 69% del PP y del 44,4% de Vox. Incluso en detalles en apariencia anecdóticos se observan estas brechas. Un ejemplo típico son los belenes. Los que más los ponen son los electores de Vox (74,5%), por delante del PP (69,9%), el PSOE (47,4%) y UP (25,2%).

Nada de esto es ilógico. Hay ideología en múltiples decisiones y era previsible que el CIS lo captase. Ahora bien, para calibrar la gravedad del fenómeno hay que mirar la evolución. Y la conclusión es que crece en asuntos clave. Ejemplos. La "situación económica general" es "muy buena" o "buena" para el 36,2% de los votantes de UP y el 34,1% del PSOE, mientras sólo la ven así el 7,1% en el PP y Vox. La visión de los votantes de izquierdas es similar a la de hace sólo un año, pero la del PP y Vox ha bajado desde un 11% y un 11,6%, respectivamente.

En el terreno fiscal se observa un ensanchamiento de las brechas. El porcentaje de los que piensan que los impuestos se pagan "sin saber muy bien a cambio de qué", una idea impregnada de negatividad, es sólo del 9,4% entre los votantes del PSOE y del 5,2% de UP. En la derecha, los porcentajes suben al 35,9% (PP) y 57,8% (Vox). Que el electorado derechista confíe menos en la utilidad de los impuestos puede encajar sin sorpresa. Más significativo es que sea una confianza menguante pese a una pandemia y una inflación que han forzado al Estado a esfuerzos inéditos. En 2019 el porcentaje de votantes del PP que no se sabía "muy bien a cambio de qué" se pagan impuestos era del 27,3%, frente al 35,9% de ahora. En cuanto a Vox, su porcentaje ha subido del 40,2% al 57,8%. En el electorado de los dos partidos de derechas cae la fe en la capacidad de los impuestos para redistribuir o prestar servicios. ¿La clave? Que la perspectiva sobre todos estos asuntos ha evolucionado de manera opuesta en los votantes de izquierdas. Es decir, no es sólo que haya diferencias, es que además crecen.

Alejamiento ideológico y acusaciones de ilegitimidad

El sociólogo del CSIC Luis Miller señala que a menudo se recuerda que la polarización también fue alta en otros periodos, como durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008). Pero ve una diferencia: "La sociedad no estaba dividida. Hoy los electores piden a los partidos cosas muy distintas". Pone un ejemplo: los impuestos. En la encuesta Opinión pública y política fiscal de julio de 2004, un 66,6% de los votantes del PSOE creían que en España se pagaban "muchos", más incluso que en el PP (65,6%) y similar a IU (66,2%). Hoy las diferencias son abismales: 21,7% en el PSOE y 56,5% en el PP. Además, han surgido dos partidos cuyas posiciones son aún más divergentes: 20,4% en UP y 80,8% en Vox. Lo que ha ocurrido en este tiempo, que abarca una recesión de proporciones históricas con elevado coste para los servicios públicos, es que los impuestos se han problematizado ideológicamente.

Estas disparidades no pueden aislarse de la negativa de PP y Vox a alcanzar acuerdos con un gobierno de PSOE y UP, incluso aunque ello suponga un bloqueo de instituciones constitucionales. Al mirar las encuestas, tanto Feijóo como Santiago Abascal ven que sus

electores tienen una visión sobre un tema clave que es incompatible con la que tienen los votantes de los partidos que sostienen al Ejecutivo. A esta dificultad se suma el continuo enfrentamiento en los términos más duros, que rompe puentes no ya entre las direcciones de los partidos, sino entre las bases de las formaciones de oposición y el Gobierno. De nuevo esto es observable durante la pandemia. En abril de 2020, aún un 74% de los votantes del PP y un 68,7% de los de Vox creían que había que "apoyar al Gobierno y dejar las críticas para otro momento". En mayo esos porcentajes cayeron hasta el 45,6% y el 40,4%, respectivamente. Fue en un solo mes. Un mes, eso sí, plagado de descalificaciones al Gobierno, acusado de usar la pandemia en su beneficio.

Mariano Torcal, catedrático de Ciencia Política de la Pompeu Fabra, señala que hay un marcador efectivo para medir la "polarización afectiva". Se trata de la ubicación ideológica que los votantes de un partido asignan a otros partidos. Por ejemplo, los votantes del PP sitúan al PSOE en un 2,84, siendo 1 totalmente a la izquierda y 10 totalmente a la derecha. Es decir, lo ven bastante a la izquierda, aunque no tanto como los de Vox, 2,22.

La evolución de la valoración de Sánchez también ayuda a entender por qué Feijóo puede temer la reacción de los suyos a un acuerdo. El empeoramiento de la opinión sobre el presidente de los votantes del PP es fuerte sobre todo en el último año. Los que le dan la peor nota, 1 sobre 10, "muy mal", han pasado del 49,5% al 59,6%. Los que tienen "ninguna confianza" en él, del 71,5% al 80,5%. Estos porcentajes son altos, pero no tantos como los que arrojan los votantes de Vox: el 81,1% le da la peor nota; al 95,4% no les inspira "ninguna confianza". Por supuesto, entre los votantes de izquierdas también hay polarización, pero no es tan radical. Por ejemplo, quienes ven "muy mal" a Feijóo son el 15,3% de los votantes del PSOE y el 30,9% de los de Podemos. Quienes no le tienen "ninguna confianza" son el 38,4% entre los socialistas y el 67,1% entre los morados. No es una visión tan negativa.

Aplauso a la ruptura de negociaciones

Los indicios de que sus votantes no quieren que llegue a acuerdos con Sánchez se le han acumulado a Feijóo. Especialmente, sobre la reforma judicial. El Confidencial publicó en octubre que sondeos del PP le decían que el 80% de los suyos rechaza pactos con Sánchez. En noviembre El Debate lanzaba una encuesta de Target Point: el 81% de los votantes del PP aplaudían que Feijóo hubiera abandonado la negociación. El CIS tampoco deja lugar a dudas. Pregunta en noviembre: "¿Quién es el principal responsable de que no se haya llegado a un acuerdo?". Sólo un 6,9% de los votantes del PP creen que la culpa es de Feijóo, frente a un 53,7% que señalan al PSOE y un 22,4% que reparten culpas. En Vox aún es mayor el porcentaje que culpa a Sánchez: 57,8%.

Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, reunidos en La Moncloa en octubre.

Con datos así es más fácil entender por qué Feijóo no pacta, aunque se trate de un asunto no meramente importante, sino clave para el funcionamiento institucional. El presidente del PP no encuentra el menor reproche en su partido. A diferencia de lo que le ocurre a Sánchez con las cesiones a ERC, cuando hay barones críticos como Emiliano García Page, Feijóo encuentra el respaldo unánime de su formación a pesar del incumplimiento constitucional. Es más, el ala dura le presiona para que no frene el bloqueo.

La importancia del lenguaje

Carmen María López-Rico, autora del artículo Polarización y confianza en los medios españoles durante el covid-19, muestra poca sorpresa ante la postura de Feijóo. "El electoralismo siempre mueve a la política. El PP no sólo piensa en su electorado, sino también en rasgar votos al otro [del PSOE]", señala. A su juicio, hay un sector del electorado socialista abierto a pactos con el PP que, según el razonamiento de Feijóo, puede acercarse a este partido si ve al PSOE muy atado a UP y los independentistas. López-Rico cree que el presidente, con su acusación a Feijóo de "incumplir la Constitución", trata por su parte de atraerse a un votante de centro que puede llegar a identificar al PP como culpable pero que ahora podría estar sumido en lo que la politóloga Elisabeth Noelle-Neumann llamó "la espiral de silencio". A juicio de la profesora de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández, esta atracción es difícil porque la renovación del CGPJ no es vista por la mayoría como un asunto institucional de obligado cumplimiento, sino como una cuestión "pasional", dado que el uso de un "lenguaje" cargado de visceralidad se ha trasladado a los electores. No en vano, se les ha dicho que lo que está en juego es la "demolición del Estado de derecho", en palabras de Ayuso.

El mes de diciembre ha sido especialmente duro en la retórica. A raíz del intento del Gobierno de cambiar las mayorías para la renovación del CGPJ y el Constitucional mediante enmiendas – algo que el TC impidió votar en las Cortes–, Vox denuncia un "golpe de Estado" y Feijóo habla de "quiebra institucional". Ayuso afirma que Sánchez conduce al país a una "situación dictatorial". Por su parte, PSOE y UP han acusado al PP de atentar contra la democracia por su recurso ante el Constitucional. El uso de una retórica así acaba dejando "muy poco margen de acción" a los partidos, señala López-Rico. "Es un círculo vicioso. Finalmente cualquier pacto es visto como una debilidad, como una derrota", dice la profesora, que cree que todos los partidos tienen su parte de responsabilidad en el uso de un lenguaje marcado por la lógica de "ganar a toda costa", pero incide en la gravedad cuestionar la "legitimidad" del Gobierno.

Círculo vicioso

Irene Menéndez y Michael Becher, profesores en la IE School of Global and Public Affairs, ponen el énfasis en la responsabilidad de los líderes. "Algunos políticos pueden temer el rechazo por parte de sus votantes al pactar con sus adversarios. Pero la polarización entre ciudadanos es, al menos en parte, una respuesta a la polarización entre partidos. Si los políticos se sienten constreñidos por sus votantes, hasta cierto punto son prisioneros de sus propias estrategias", señalan.

En la misma línea se expresa Mariano Torcal, que en enero publicará con Catarata un libro sobre el paso "de votantes a hooligans". A juicio de Torcal, las élites políticas son "prisioneras" del tribalismo que ellas mismas inoculan en sus bases. Y añade que la presión centrífuga de Vox –para el PP– y UP –para el PSOE– dificulta el entendimiento entre los dos principales partidos. Con los datos que tiene por delante, ¿es previsible que el PSOE, si en el futuro está en la oposición, le haga lo mismo al PP? "Históricamente", responde Torcal, "los momentos de menor polarización se han dado con el PSOE en la oposición. No sé qué va a ocurrir, pero lo que dicen los antecedentes es eso".

Riesgo democrático

Torcal alerta de la gravedad que el problema tiene no ya para la atmósfera política, sino para la salud democrática, dado que la polarización "rompe la cohesión social", como también ha observado Diego Sánchez-Ancochea, director del Departamento de Desarrollo Internacional en Oxford, en su ensayo El coste de la desigualdad. Lecciones y advertencias de América Latina para el mundo (Ariel, 2022).

Menéndez y Becher, autores de un artículo sobre la materia en el último informe sobre democracia de la Fundación Alternativas, citan a su vez un estudio centrado en EEUU de Mathew Graham y Milan Svoliks que muestra que "la polarización entre los votantes hace que los políticos se salgan con la suya a la hora de socavar las normas e instituciones democráticas". "En sociedades polarizadas, los políticos tienen más margen a la hora de promover objetivos partidistas a expensas del funcionamiento democrático", señalan.

Feijóo hace caso omiso a Bruselas y lleva al Congreso su reforma del Poder Judicial sin desbloquearlo

La última vez que el PP planteó en el Congreso cambiar el modelo de elección del CGPJ fue en septiembre de 2021 y cosechó un amplísimo rechazo

Bruselas ha advertido en numerosas ocasiones al Partido Popular que lo "urgente" es que cumpla la ley y ponga fin al bloqueo en la renovación del Consejo

Su estrategia para impedir que el Tribunal Constitucional, en cumplimiento de la ley, pasase de tener una mayoría conservadora a una progresista, poniendo así fin a nueve años de dominio ideológico de la derecha en el órgano encargado de interpretar la constitucionalidad de la leyes, acabó derrotada. Así que Alberto Núñez Feijóo se concentra ahora en tratar de justificar por qué el PP mantiene bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano en el que los jueces elegidos por su partido mantienen una mayoría que caducó hace más de cuatro años.

Fue en 2018 cuando los vocales con mandato vencido debieron haber dejado paso a otros elegidos por un Congreso y un Senado con mayoría progresista. Pero el PP se resiste a perder el control de un Consejo del que dependen nombramientos clave en el Tribunal Supremo y otras

instancias judiciales.

Feijóo mantiene punto por punto la táctica de su antecesor, Pablo Casado. Para que no se hable del bloqueo que lleva a cabo el PP —sin el concurso de este partido no es posible llevar a cabo un proceso de renovación que exige una mayoría del Congreso de tres quintos—, propone una modificación de la ley que, de llevarse a cabo, dejaría para siempre el CGPJ en manos de los jueces conservadores, mayoritarios en la judicatura española.

El último movimiento del presidente del PP ha sido presentar en la Cámara Baja una proposición de ley de reforma del modelo de elección de los miembros del Consejo. Cambiar la ley vigente desde hace casi 40 años es la misma condición que Feijóo puso al Gobierno de Pedro Sánchez para llevar a cabo la renovación. Las negociaciones abiertas en octubre fracasaron cuando Feijóo cedió a la presión del ala radical del PP, liderada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y de la extrema derecha, alarmados ante la posibilidad de que el nuevo líder del partido pudiese llegar a un acuerdo con el Gobierno. Para justificar la ruptura de los contactos, Génova buscó, una vez más, una excusa ajena al CGPJ: la reforma del delito de sedición en el Código Penal, un asunto que apenas unas horas antes el equipo de Feijóo decía que no perturbaría las negociaciones.

Pero la reforma legal que Feijóo quiere que su partido defienda en el Congreso no es, en lo sustancial, muy diferente de la que el PP planteó sin éxito en septiembre de 2021, hace poco más de un año, en el mismo parlamento en el que quiere que se vuelva a debatir. Busca acabar con el modelo actual, en el que Congreso y Senado seleccionan a 12 de los 20 vocales de una lista de 50 nombres que les facilitan las asociaciones judiciales (los otros ocho sólo pueden ser elegido por las Cortes porque así lo establece la Constitución).

Amplio rechazo

Cuando el PP de Pablo Casado buscó el respaldo del Congreso a su reforma, en septiembre de 2021, una amplísima mayoría de la Cámara rechazó la propuesta de que sean los jueces, sin intervención alguna de las Cortes, los que elijan directamente a doce de los 20 vocales del Consejo. Únicamente Vox, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias apoyaron al Partido Popular. En total, 190 votos en contra y sólo 154 a favor, 22 menos de los que se necesitan para reformar una ley orgánica como la que regula la elección del CGPJ.

Casado, como ahora Feijóo, mantenía bloqueada la renovación del Consejo de acuerdo con la legislación vigente y exigía al PSOE cambiar la norma para que 12 de los 20 vocales fuesen elegidos por votación directa de los jueces. Aquel debate lo recuerda bien la actual portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, porque ocupaba el mismo puesto. Entonces acusaba al Gobierno de situarse en la “insumisión constitucional y de los estándares que marca Europa” mientras defendía el boicot de su partido a la renovación del Consejo. Y usaba argumentos idénticos a los que emplea ahora Feijóo. Según ella, cumplir la ley y adecuar la mayoría de CGPJ a la que existe en las Cortes, como se lleva haciendo siempre en España desde 1986, tanto con gobiernos del PSOE como del PP, era intentar “someter los órganos constitucionales al vasallaje de los designios autocráticos” de Pedro Sánchez.

Entonces el PP tuvo que oír duros reproches de casi todos los grupos representados en el Congreso. “No me gusta la ley, la cambio”, le recriminó el portavoz socialista, José Luis Ramos. “Que hoy se presenten como defensores de la Constitución, de la separación de poderes, es una tomadura de pelo, un gran acto de cinismo”, declaró desde la tribuna Jaime Asens, de Unidas Podemos, mientras la portavoz de ERC, Carolina Telechea, les acusaba de “hipocresía”.

Las críticas llegaron también del PNV, cuyo portavoz, Mikel Legarda, sostuvo que la elección parlamentaria del CGPJ no menoscaba la independencia judicial ni vulnera la Constitución. Apoyar la reforma del PP, dijo, sería tanto como “validar su labor obstruccionista y el chantaje que está practicando” el principal partido de la oposición.

El empeño del PP en volver a debatir una propuesta que ya no obtuvo el respaldo del Congreso hace poco más de un año busca poner el foco en la reforma del sistema y dejar en segundo plano que el problema es que llevan cuatro años boicoteando la renovación de este organismo. Una estrategia que supone además un desafío a la Comisión Europea, cuyo comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, ha dejado muy claro en numerosas ocasiones que aunque es partidario de un cambio en el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo “urgente” en estos momentos es que se lleve a cabo su renovación, que el

principal partido de la oposición bloquea desde más de cuatro años. Es decir: primero la renovación y después el debate sobre la reforma del modelo de elección.

Feijóo sabe que tampoco esta vez el Congreso aprobará su reforma. Pero quiere desviar así la atención del problema de fondo —el bloqueo decretado por su partido desde 2018— a la espera de que una eventual victoria en las urnas dentro de un año le permita, entonces sí, cambiar la ley y garantizar una mayoría conservadora permanente en el CGPJ.

https://www.infolibre.es/politica/fejoo-caso-omiso-bruselas-plantea-congreso-reforma-judicial-camara-rechazo-ano_1_1398865.html

FEIJÓO ABRE EL CICLO ELECTORAL AFERRADO A LOS MENSAJES QUE LLEVARON A CASADO A LA DEBACLE HACE AHORA UN AÑO

La deslegitimación del Gobierno y de las Cortes, cuya representatividad no reconoce, está en la base de la estrategia electoral del Partido Popular para las autonómicas y municipales de mayo

El líder del PP, que llegó al cargo tratando de marcar distancias con su antecesor, reproduce una por una las ideas del dirigente defenestrado por los barones en la revuelta de marzo de 2022

El Partido Popular ya está en campaña, una de las más largas que se recuerdan. Y su argumentario, las ideas sobre las que construye el discurso su líder, Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de ganar primero las municipales y autonómicas del 28 de mayo y después las generales de finales de año, son un calco de las que defendía hace doce meses Pablo Casado antes de que la revuelta de los barones decidiese poner fin abruptamente a su mandato.

Igual que su malogrado antecesor, el equipo de Feijóo repite la consigna de que “hay una pulsión de cambio” en nuestro país que se va a ver claramente el 28M. En esa “primera estación” del año electoral están seguros de que serán capaces de volver a ser la fuerza más votada, algo que el PP no consigue desde las elecciones generales de 2016.

El argumento es idéntico al que proclamaban Casado y su número dos, Teodoro García Egea, en el invierno de 2022: todas las encuestas otorgan una victoria electoral al Partido Popular. Excepto la del CIS, a la que otorgan cero credibilidad porque este organismo está dirigido por José Félix Tezanos, un sociólogo que antes de llegar al cargo por decisión del Gobierno formaba parte de la ejecutiva del PSOE. Otra cosa es lo abultada que sea esa victoria y que en todos los casos, sin excepción, la llegada de Feijóo a la Moncloa vaya a depender de la ultraderecha de Vox, también según todas las encuestas.

La estrategia de Feijóo descansa en gran medida sobre una segunda idea que Génova y sus medios afines repiten un día sí y otro también: el Gobierno actual no tiene legitimidad, por muchos presupuestos que aprueba —lleva tres consecutivos en tres años— y por más que haya salido de una investidura en el Congreso y conserve una mayoría holgada en la Cámara con la que saca adelante todas sus iniciativas.

La tesis del Gobierno ilegítimo es clave para el equipo actual de Génova, porque en ella se apoyan para exigir elecciones todos los días, pero viene de lejos. Casado ya la utilizó desde comienzos de 2020, igual que sus aliados de Vox, con los que el PP gobierna Castilla y León y gracias a los cuales logró conservar en 2018 y 2019 las comunidades de Madrid y Andalucía. El Gobierno es “ilegítimo”, según el PP, porque ha tomado decisiones que no estaban en el programa electoral del PSOE y algunas de ellas contradicen declaraciones realizadas por el presidente Pedro Sánchez antes de las elecciones, como el deseo de no gobernar con Unidas Podemos.

A partir de ahí, razonan en Génova para intentar desacreditar al Ejecutivo, cualquier decisión que tome el Gobierno tampoco tiene legitimidad, aunque lo haga con el respaldo del Congreso y del Senado. Porque, en opinión de los dirigentes del PP, ambas Cámaras ya no representan “a la mayoría social”, por mucho que estén en pleno ejercicio de sus facultades porque fueron elegidas para cuatro años. “Tenemos el peor Gobierno de la historia democrática en el momento más difícil”, acusan, y un presidente que “ha perdido la legitimidad en el ejercicio del poder porque está haciendo todo lo contrario a lo que prometió en campaña electoral”.

Sumisión al independentismo

En esa línea reprochan a Sánchez que el Gobierno haya decidido, sin desviarse una coma de lo que marca la ley, que la mayoría de los presos condenados por su pertenencia a ETA hayan sido trasladados a cárceles del País Vasco o próximas a esta comunidad, poniendo de hecho fin a la política de dispersión que fue una de las bases de la lucha antiterrorista cuando la banda terrorista estaba en activo —desapareció hace 11 años—. Una decisión que en todo caso palidece al lado de la que tomó en su día José María Aznar cuando ETA todavía asesinaba, secuestraba y chantajeaba.

Es un traslado que, además, no afecta al cumplimiento de las penas pero sí reduce las dificultades de los familiares de los condenados a la hora de visitarles en prisión y que no hace otra cosa que aplicar el artículo 12.1 de la Ley General Penitenciaria, que establece como objetivo “evitar el desarraigo social de los penados”.

Para plantar en el imaginario social la idea de un Gobierno sometido a Bildu, el PP no sólo sostiene que el fin de la dispersión es una concesión a la formación abertzale sino que proyectos como la Ley de Memoria Democrática o decisiones como la transferencia de las competencias de tráfico a Navarra han sido tomadas al dictado de los independentistas vascos.

La primera es una norma prometida a los electores que obtuvo en el Congreso el respaldo de una amplia mayoría (164 votos a favor). PP, Vox y Ciudadanos votaron ‘no’ junto a la CUP y JxCat y ERC y el BNG se abstuvieron. La segunda es una demanda que su día abrazaron tanto UPN en Navarra como el PP de Feijóo en Galicia pero que Génova ha querido presentar como un ataque a la Guardia Civil y una cesión a los que consideran “herederos” de ETA. Bildu, ha llegado a decir Feijóo para escándalo de los socialistas, ha conseguido más en esta legislatura que ETA cuando mataba.

Es en ese contexto en el que el PP sitúa también la decisión de reformar los delitos de sedición y malversación, dos demandas de los independentistas catalanes. De haber estado en vigor cuando tuvo lugar el juicio del procés, hubiese obligado al Tribunal Supremo a condenar por delitos de desobediencia o de desórdenes públicos a los nueve dirigentes a los que encarceló por delitos de sedición. Y hubiese impedido el embargo de sus bienes para afrontar la malversación asociada a las decisiones ilegales adoptadas por la Generalitat y el Parlament. Es una modificación para beneficiar a personas “con nombre y apellido”, denuncia el PP, que en su día reformó también el Código Penal pensando en las mismas personas pero para reforzar los mismos delitos. El Gobierno no oculta que con esta medida quiere completar el proceso de normalización de la situación política catalana, en crisis desde el referéndum ilegal de 2017.

El PP sabe, porque sus dirigentes lo admiten en privado, que no habrá ningún referéndum de autodeterminación en Cataluña por más que ERC mantenga el objetivo político de pactar su celebración con el Gobierno de España este mismo año. De hecho, la única vez que ocurrió algo parecido fue con el PP en el Gobierno y su presidente, Mariano Rajoy, fue incapaz de impedir su celebración. A pesar de ello, agitan constantemente la posibilidad de que Sánchez ceda y ese referéndum tenga lugar con el falso argumento de que la reforma del Código Penal ha despenalizado la secesión de una parte de España. Es el mismo “España se rompe” que proclamaba Casado antes de que sus propios compañeros le diesen el finiquito para entregar a Feijóo las llaves de Génova.

El Ejecutivo se ha convertido en una “fábrica de independentistas”, llegó a decir este lunes el brazo derecho de Feijóo, el vicesecretario de Organización del partido, Miguel Tellado. En realidad, los partidarios de la independencia en Cataluña nunca fueron tantos como durante el último mandato de Rajoy ni tan pocos como en la actualidad.

Cuando presta atención a la economía, Génova sólo lo hace para cuestionar las medidas que se toman. Sus dirigentes niegan el crecimiento de la economía, el de 2022 y el previsto para 2023, ponen en entredicho la evolución positiva del empleo —sólo sacan pecho de las cifras en las comunidades con presidentes del PP— y se centran en los precios de la cesta de la compra para no tener que admitir la evidencia de que la inflación española es desde hace meses la más baja de la zona euro. El último paquete anticrisis del Gobierno, que de nuevo incluye medidas reclamadas por el PP, otra vez les parece insuficiente.

Los dirigentes del PP prefieren poner el acento en los efectos indeseados de la ley del sólo sí es sí, cuya redistribución de penas algunos jueces están interpretando a favor de los condenados por delitos graves de abuso sexual y violación. Y en tratar de retratar a Pedro Sánchez como un

presidente "ausente de la realidad el país". Hace un año, exactamente, Pablo Casado decía lo mismo: y acusaba al jefe del Ejecutivo de actuar con "arrogancia", "incompetencia" e "insensibilidad" y de "mentir a todo el mundo".

https://www.infolibre.es/politica/feijoo-lanza-ano-electoral-abrazado-mensajes-llevaron-casado-abismo-ahora-ano_1_1399594.html

EL PP REGISTRA UNA LEY EN EL CONGRESO PARA CAMBIAR EL SISTEMA DE ELECCIÓN DEL CGPJ

Propone que los jueces designen a los vocales de extracción judicial, elevar los requisitos para acceder a cargos en la carrera y evitar las puertas giratorias con la política

El PP ha registrado en el Congreso una proposición de ley para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de modo que los jueces designen a los vocales de extracción judicial, elevar los requisitos para acceder a cargos en la carrera y evitar las puertas giratorias con la política.

El órgano de gobierno de los jueces superó el pasado diciembre los cuatro años en funciones ante el rechazo del PP a negociar con el Ejecutivo su renovación.

En su iniciativa, el PP considera evidente que el actual modelo de designación parlamentaria de los vocales no goza ni del respaldo de Bruselas ni del "consenso social, jurídico o político" necesario para garantizar los principios de "transparencia e independencia" que exigen las instituciones democráticas.

Fortalecer "los pilares democráticos"

A su juicio, urge un nuevo consenso que fortalezca "los pilares democráticos", en línea con lo que vienen reclamando tanto la Comisión Europea como el Consejo de Europa.

Plantea así que los doce vocales de extracción judicial sean elegidos por los jueces y magistrados. El Congreso y el Senado seguirían eligiendo a los ocho vocales del turno de jurista por mayoría de tres quintos.

Según su propuesta, no podrán aspirar a estos puestos quienes hayan ocupado un cargo electo o político en los últimos cinco años.

Para fortalecer la independencia del poder judicial y mejorar la confianza de los ciudadanos, plantea establecer criterios más rigurosos y transparentes en el acceso a determinados puestos y dificultar el regreso a la carrera judicial desde la política.

Propone así que los jueces que se presenten como candidatos en unas elecciones o que sean nombrados para un cargo político de confianza deban declararse en situación de excedencia voluntaria y no puedan reingresar al servicio activo hasta dos años después del cese.

Si solicitan el reingreso, en los dos años siguientes al ceses quedarán adscritos al CGPJ para presentar el servicio especial de carácter gubernativo que este órgano les asigne.

La iniciativa de los populares refuerza también las mayorías dentro del CGPJ a la hora de elegir distintos cargos judiciales, exigiendo el apoyo de tres quintos de los vocales.

Propone además elevar a diez a quince años el tiempo de ejercicio profesional exigido a los juristas de reconocido prestigio para acceder a plazas en las salas de lo civil y lo penal de los tribunales superiores de justicia y elimina la intervención de las asambleas legislativas autonómicas en su elección.

En el caso del Supremo, pide que los magistrados cuenten con al menos 20 años en la carrera.

Sin acuerdo con el gobierno

A finales del pasado octubre, el PP volvió a romper un acuerdo que estaba prácticamente cerrado con el Gobierno para renovar el CGPJ al rechazar los planes de la Moncloa para

reformular el delito de sedición.

Últimas noticias en España, hoy: varios heridos en un ataque en la Estación del Norte de París
La portada de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, hoy miércoles 11 de enero del 2023
Cuatro años antes, en octubre de 2018, había saltado por los aires un pacto ya cerrado tras salir a la luz un wasap del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que hablaba de controlar la Sala de lo Penal del Supremo por "detrás".

Poco después el PP planteó una reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ similar a la registrada este martes, pero la mayoría del Congreso rechazó la propuesta y defendió el actual sistema de elección a través del Parlamento.

<https://www.epe.es/es/actualidad/20230103/pp-ley-congreso-cambiar-sistema-eleccion-cgpi-80636602>

25 EXCUSAS PARA RENOVAR EL CGPJ: LO QUE EL PP NO CUENTA A BRUSELAS EN SU PROPUESTA JUDICIAL

Feijóo plantea elevar a la UE su reforma para la despolitización del Poder Judicial el año en el que España asume la presidencia rotatoria

Bruselas jugará un papel fundamental en el último curso de la legislatura. España acudirá a las urnas a finales de 2023 en un principio, momento en el que asumirá por quinta vez la presidencia de turno de la Unión Europea. Génova empieza a urdir su respuesta contra una pata clave en la estrategia de Pedro Sánchez para la futura campaña electoral y elevará a la UE su proposición de ley orgánica para la despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un plan que, sin embargo, ocultará las 25 excusas que el Partido Popular ha puesto desde 2020, en tiempos de regencia de Pablo Casado.

Génova se adelantará al presidente del Gobierno en su estrategia por reforzar su perfil en el ámbito internacional. Toda vez asentado en el trono de la Internacional Socialista, Sánchez tiene las miras puestas en el segundo semestre del curso, cuando España asuma la presidencia de la UE. Por ello, el PP ya ultima su plan de torpedeo al escaparate de Sánchez en Bruselas. Según ha avanzado el diario El Mundo, a pesar de que niegan a este periódico cualquier estratagema en esta dirección, el partido hará llegar su propuesta de despolitización del Poder Judicial al comisario de Justicia comunitario, Didier Reynders, quien visitó España hace escasas fechas y urgió al entendimiento entre los dos grandes partidos del arco parlamentario para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

La proposición de ley de los populares, que no ha cuajado entre las diversas asociaciones judiciales, respalda que los jueces elijan "por y entre sí" a la docena de vocales que componen el Poder Judicial procedentes de la carrera judicial. Asimismo, Génova propone una batería de requisitos en base a la antigüedad y el currículum para establecer un baremo objetivo -o que pretende serlo- para las designaciones del órgano de gobierno de la judicatura.

Torpedeo en Bruselas

Según El Mundo, fuentes del partido conservador admiten en privado que elevarán su propuesta a Bruselas, con el fin de hacerle saber al comisario de Justicia, como la política no es capaz de desbloquear el CGPJ, que lo resuelvan los propios jueces. Reconocen que supone un punto de presión para el Gobierno de cara a la presidencia de la UE y confían en que Sánchez llegue a la misma con el quiste judicial tal y como está en el momento.

El pasado mes de septiembre, coincidiendo con la visita del comisario Reynders a España, Feijóo le trasladó sus propuestas mediante una carta, que acabó con un tirón de orejas a los conservadores. Ahora, el PP le remitirá la proposición íntegra y pormenorizada, adaptándose, según alardean en Génova, a las peticiones de Europa. El comisario de Justicia instó a ambos partidos a sentarse a negociar y renovar el CGPJ para, después, acometer la reforma que permita a los jueces designar a los vocales del órgano constitucional.

Con esta estrategia, el Partido Popular busca tácitamente el beneplácito del comisario de Justicia de la Unión Europea para añadir más presión al PSOE con su reforma. Sin embargo, el plan tiene una vertiente más a largo plazo, pues el rechazo de Sánchez podría acarrear consecuencias peores para los socialistas. Al menos este es el sentir de Génova según lo publicado por El Mundo. Lo que los conservadores obviarán en esa estrategia son las

constantes evasivas y coartadas a las que se aferran desde 2020 para eludir la renovación del Poder Judicial.

Las 25 excusas del PP

Génova cavó su trinchera en 2020, en tiempos de regencia de Pablo Casado, cuando ya habían pasado dos años desde que caducó el Poder Judicial. Hay que retrotraerse al mes de agosto de ese mismo curso, cuando el entonces líder del Partido Popular justificó su negativa a acometer la renovación en base a que no había “pacto posible” con aquellos que piden la “abdicación del Rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de los batasunos”, presentándose como la “alternativa real” a Sánchez. Un pretexto que rima con los recelos de los populares a los ataques de Podemos a la figura de Felipe VI. Ofensiva que le valió a Génova como prerrogativa para no cumplir con el mandato constitucional. De hecho, un mes después, exigieron que los morados se quedaran fuera de las negociaciones.

Antes de acabar ese mismo año, el que fuera fontanero de Casado y, por ende, su número dos, Teodoro García Egea, acotó que era preferible que el CGPJ siguiera como hasta ahora a que “entren miembros de Podemos” a un organismo que “desprecia”. Entre tanto, PSOE y PP avanzaban en negociaciones que, a la postre, se tornarían en frágiles. En alguna de ellas, Génova puso como línea roja el veto al juez de Prada y a Victoria Rosell como futuros vocales.

El PP se aferró también al adelanto electoral de Isabel Díaz Ayuso tras la chapuza de PSOE y Ciudadanos en Murcia. Los populares consideraban entonces que sería más difícil alcanzar un acuerdo en un periodo de campaña, por lo que tiraron la toalla. No obstante, en abril de 2021, a menos de un mes de los comicios madrileños, blandieron el mantra de que “los jueces elijan a los jueces” como condición sine qua non para sentarse a negociar. Excusa a la que se aferraron durante meses y que salpimentaron con justificaciones de otra índole, tales como los indultos a los líderes del procés o descalificaciones varias hacia el presidente del Gobierno, aduciendo que “no es de fiar” y que “no es un presidente normal”.

Génova se aferró a la despolitización de la Justicia como arma contra Moncloa, un modelo que, según la ejecutiva de Pablo Casado, equipararía a España con el resto de la Unión Europea. Bruselas, como campo de batalla contra Sánchez; un resumen de los tres años que se acaban de cumplir de legislatura.

La etapa de Casado murió y se abrió paso a la “moderación” a la que se abrazaría el hasta entonces presidente de la Xunta de Galicia y nuevo pope conservador, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, ese aperturismo no llegó y el gallego ha coleccionado, al igual que su predecesor, todo tipo de excusas, incluyendo un emplazamiento a negociar la renovación del CGPJ tras las elecciones andaluzas de junio de 2022. Una promesa que el líder de la oposición no cumplió, ya que después supeditó la negociación a la inclusión de “algunas reformas de regeneración” de la Justicia.

El pacto estuvo cerca y España rozó la renovación de su órgano constitucional en octubre de este mismo año. La visita de Reynders y la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, aceleraron los contactos entre PSOE y PP, envueltos en un halo de misterio y “prudencia”. Sin embargo, cuando todo parecía hecho, aprovechando los trayectos del presidente del Gobierno en su gira por África, los conservadores rompieron el acuerdo, al que tan solo le faltaba la rúbrica final, amparándose, esta vez, en la reforma del delito de sedición.

Una voladura de puentes unilateral que ha provocado que, ya en 2023, la situación del CPGJ siga como en 2018. Es decir, encasquillada y sin visos a renovarse. Ahora, los conservadores han puesto sobre la mesa su propuesta para despolitizar elección de los vocales del Poder Judicial, sustentada en un plan de torpedeo al Gobierno en Europa y que se acomete seis meses antes de que España asuma la presidencia de turno de la Unión.

https://www.elplural.com/politica/espana/25-excusas-renovar-cgpi-pp-no-cuenta-bruselas-propuesta-judicial_303725102

UNA DERECHA EN TRANSFORMACIÓN Y CERRADA AL ACUERDO CON EL GOBIERNO

En 2022 el PP cambió de líder, Vox sufrió su primera escisión y Ciudadanos se rompió en una disputa por el poder; pero todos comparten la negativa frontal a las políticas de Pedro Sánchez

La derecha española se ha transformado en 2022, aunque al estilo gatopardista: cambiando todo para que nada cambie. La metamorfosis más importante ocurrió en el PP, que defenestró a su joven líder criado políticamente en las Nuevas Generaciones de Madrid —Pablo Casado— lo sustituyó por un político sénior de la periferia —Alberto Núñez Feijóo—. Sin embargo, el nuevo presidente popular, que prometió a su llegada alcanzar pactos de Estado y que tiene las encuestas de cara, termina el año como su predecesor, sin haber suscrito con el Gobierno ni un mínimo acuerdo. Sus rivales en el espacio de la derecha también han afrontado un año de turbulencias internas. Vox atravesó un periodo aciago por su primera escisión, la de Macarena Olona; Ciudadanos agoniza en una lucha de poder por los restos del naufragio que libran Inés Arrimadas y Edmundo Bal. En conjunto, el bloque conservador, que sigue reconfigurándose, comparte un electorado muy movilizado y una estrategia de bloqueo a todo acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez muy similar a la de los años anteriores.

Casado, defenestrado. El PP se abrió en canal en marzo: un acuerdo vertiginoso de los barones territoriales del partido resolvió que el decano de todos ellos, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se hiciera con el control del partido, herido de muerte por la disputa entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Este terminó defenestrado por los suyos. El político gallego fue proclamado líder del PP el 2 de abril en un congreso sin rival. Configuró una dirección que reparte el poder entre el PP gallego y el andaluz, y se mudó a Madrid con su equipo de asesores más próximo de la Xunta.

Primer Gobierno conjunto de PP y Vox. El 11 de abril, apenas nueve días después del congreso del PP, Alfonso Fernández Mañueco fue investido presidente de Castilla y León con los votos de Vox, tras haber dado entrada a la extrema derecha en su Gobierno con una vicepresidencia, tres consejerías y la presidencia de las Cortes autonómicas. Feijóo permitió hacer ese pacto hasta entonces inédito, aunque marcó distancias ausentándose en la investidura de Mañueco.

Ayuso logra el poder orgánico en Madrid. Feijóo entregó a la baronesa madrileña el poder del PP de Madrid que Casado le negaba, pero no por eso se libró de que ella le siguiera marcando el paso, como hacía con su predecesor. Ayuso hizo público que había presionado al líder del PP para que no pactara la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el Gobierno. Tras superar la guerra interna en el PP y que trascendiera que su hermano cobró indirectamente de su Administración en plena pandemia, la presidenta autonómica ha encajado este año el primer golpe a su gestión: el 13 de noviembre se celebró en la capital una multitudinaria manifestación contra el deterioro de la sanidad pública.

La gesta andaluza de Moreno Bonilla. El 19 de junio, Juan Manuel Moreno Bonilla dio la campanada con una victoria histórica en las elecciones andaluzas, imponiéndose con una mayoría absoluta en el principal feudo socialista de España. El barón popular pudo gobernar en solitario y disparó a Feijóo en las encuestas, que desde entonces este ha liderado (salvo las del Centro de Investigaciones Sociológicas).

Vox sufre su primera escisión. Apenas un mes después de los comicios andaluces, el 29 de julio, Macarena Olona, la candidata de la extrema derecha, abandonó la política alegando cuestiones de salud. Después reveló que se daba de baja en Vox y sus desavenencias internas con la dirección de Santiago Abascal. Olona no se ha retirado de la vida pública —aunque sí ha solicitado recuperar su plaza de abogada del Estado— y amaga con lanzar su propio proyecto político tras las elecciones autonómicas y municipales del próximo mayo.

El PP lanza la batalla fiscal ... hasta el fiasco de Liz Truss. Juan Manuel Moreno Bonilla anunció en septiembre que Andalucía suprimía el Impuesto de Patrimonio, un tributo autonómico que grava la riqueza de los contribuyentes superior a los 700.000 euros. El PP lanzó entonces una batalla fiscal contra la izquierda que provocó que algunos barones socialistas, como el valenciano, Ximo Puig, se apuntaran también a las rebajas fiscales. Todo cambió el 20 de octubre, tras la dimisión de la primera ministra británica, Liz Truss, por el monumental fiasco de su plan de rebajas masivas de impuestos. El PP, cuyo último programa electoral proponía medidas idénticas a las de Truss, abandonó paulatinamente la pelea fiscal. La debacle económica que anunciaba el PP no ha llegado y Feijóo ha aparcado la economía para centrar su oposición en la reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno para favorecer a los líderes del procés independentista catalán.

Feijóo vota en contra del impuesto europeo a las eléctricas. La primera decisión de calado de Feijóo como líder del PP le llevó a votar en otoño en contra del impuesto extraordinario a las

energéticas y la banca. El problema fue que, solo 24 horas después del voto negativo de los populares en el Congreso, la presidenta de la Comisión Europea, la conservadora Úrsula Von der Leyen, pronunció en Bruselas un contundente discurso en favor del gravamen a las eléctricas, dejando al PP con el pie cambiado. El episodio abrió una grieta de Feijóo con el PP europeo y con Von der Leyen, con quienes ya ha empezado a reconducir las discrepancias.

El volantazo en el Poder Judicial. El momento más frágil del liderazgo de Feijóo llegó el 27 de octubre, con la ruptura de la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya ha cumplido cuatro años con el mandato caducado. Feijóo se echó atrás en el último momento, cuando el acuerdo con el Gobierno estaba casi cerrado. Lo hizo, dijo, al obtener la certeza de que el Ejecutivo iba a reformar el Código Penal para bajar las penas a los condenados y encausados del procés.

Ciudadanos se autodestruye. El tercer partido de la derecha sufría en silencio una progresiva decadencia sin haber conseguido representación en Andalucía (y con solo un procurador en Castilla y León) hasta que implosionó en una guerra interna. La disputa enfrenta a la líder, Inés Arrimadas, y a su portavoz parlamentario, Edmundo Bal, que se medirán en unas primarias —aunque ella no encabezará su lista— el próximo enero.

PP y Vox: el deshielo. El año que termina ha propiciado también el deshielo entre el PP y Vox con una reunión secreta que luego trascendió de Feijóo y Abascal y que inauguró una nueva etapa de relaciones fluidas entre ambos. La extrema derecha presiona al líder del PP para que encabece una moción de censura contra Pedro Sánchez; aquel se niega, aunque ha prometido abstenerse si Vox la presenta. En el horizonte, ambos partidos saben que se necesitarán tras las autonómicas de mayo.

De la crisis institucional al Tribunal Constitucional progresista. El bloqueo de los populares a la renovación del CGPJ detonó una crisis sin precedentes tras un recurso de Feijóo al Tribunal Constitucional. Los populares impugnaron el método legislativo exprés —introducir enmiendas a una ley que nada tenía que ver— que había utilizado el Gobierno para sortear la parálisis, reformando la elección de los magistrados del propio tribunal de garantías y este, entonces con una mayoría conservadora, suspendió la votación en el Senado. Pero la partida en la justicia no terminó bien para el PP. Después de seis meses de jugada de los conservadores para influir en la renovación del Constitucional, el resultado es una victoria amarga. Aunque lograron que el CGPJ designara a los dos magistrados que ellos proponían, no evitaron la nueva etapa progresista en el tribunal, que echará a andar en enero. Feijóo ha amenazado ahora con actuar contra los dos magistrados del Constitucional propuestos por el Gobierno, anticipando una nueva batalla en la justicia. El año termina, una vez más, con un radical desacuerdo entre el Gobierno y la oposición.

<https://elpais.com/espana/2023-01-01/una-derecha-en-transformacion-y-cerrada-al-acuerdo-con-el-gobierno.html>